



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

1
2EJ

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

ACTORES QUE DAN APERTURA E
INTERVIENEN EN LA TRANSICION
DEMOCRATICA CHILENA: 1982-1990

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
P R E S E N T A
MARCELA ACOSTA CHAVEZ



ASESOR DE TESIS: DRA. SARA GORDON RAPOPORT

MEXICO, D. F.

1995

FALLA DE ORIGEN

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

***Dedico este trabajo a mi familia,
a mi Madre por el apoyo y las enseñanzas,
a mis hermanos por su comprensión
y a María por darme ánimos en esta lucha constante.
A todos ellos, gracias***

ÍNDICE

ACTORES QUE DAN APERTURA E INTERVIENEN EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA CHILENA: 1982-1990

	Pág
INTRODUCCIÓN	3
CAPÍTULO 1	
CAÍDA DE REGÍMENES AUTORITARIOS Y TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA.....	8
1.1 Caída de regímenes autoritarios.....	9
1.2 Transición.....	10
1.3 Liberalización.....	11
1.4 Democratización.....	12
1.5 Interacción entre liberalización y democratización.....	14
1.6 Incertidumbre en la transición democrática.....	15
CAPÍTULO 2	
PROCESOS Y ACTORES QUE DAN APERTURA A LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA CHILENA.....	18
2.1 Crisis económica.....	18
2.2 Pugnas internas en las fuerzas armadas.....	22
2.3 Presiones internacionales.....	25
2.4 Acción sindical en el periodo de apertura.....	31
2.5 Las mujeres frente a la apertura.....	35
2.6 Situación de los empresarios.....	39
2.7 Oposición popular al régimen.....	42
2.8 Partidos políticos ante la apertura.....	46
CAPÍTULO 3	
ACTORES QUE INTERVIENEN EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA CHILENA.....	53
3.1 Empresarios.....	54
3.2 Mujeres en la transición democrática.....	62
3.3 Factores externos durante la transición democrática.....	65
3.4 El sindicalismo y la transición en Chile.....	70
3.5 Oposición popular al régimen.....	74
3.6 Partidos políticos y transición democrática.....	80
CAPÍTULO 4	
CONCLUSIONES.....	96
BIBLIOGRAFÍA	102

Introducción

Para nuestro continente, el fin de las dictaduras en el Cono Sur es uno de los fenómenos de mayor envergadura en los últimos tiempos.

Esta investigación tiene el interés de estudiar el comportamiento de los actores sociales y políticos que participan en el proceso de la transición hacia la democracia en Chile.

Desde el punto de vista de las transiciones democráticas, el caso chileno presenta una cierta paradoja. En una perspectiva histórica, Chile parece poseer las condiciones necesarias para la pronta restauración de la democracia perdida con el golpe militar de 1973. Entre otros factores, se puede citar la gran tradición histórica de regímenes democráticos con que cuenta el país, la fuerza que mostraron algunos aparatos partidarios de extensión nacional, y el aliento que desarrollaron a la participación, acompañada por una amplia sociedad civil. No obstante, comparado con regímenes similares en el Cono Sur, el caso chileno parece rezagado en los hitos de la democratización. Lo anterior se debe fundamentalmente a los enclaves autoritarios que aún arrastra el actual régimen democrático chileno.

Por otra parte, es pertinente identificar algunos conceptos que se manejarán constantemente a lo largo de este trabajo; se estudiarán los actores desde el punto de vista en que los define Max Weber, este autor el significado de acción es la lucha o selección de las relaciones sociales. Para Weber el individuo es un actor en la medida que se está relacionando con los demás individuos de la sociedad. Cuando un determinado número de individuos se agrupa para conseguir un determinado fin, constituyen un actor social o político, (Weber, 1944: 20-39). Por lo general, el comportamiento de los actores siempre presentará dos aspectos: "uno ofensivo y otro defensivo", (Crozier, 1990: 47). En el ofensivo intentan aprovechar las oportunidades que se presentan con el objeto de mejorar su situación y en el defensivo intentan

mantener y ampliar su margen de libertad y por tanto, su capacidad de actuar. Por ello los actores de oposición al gobierno militar aprovechan el plebiscito convocado por Pinochet e intentan, con la apertura hacia la transición, ampliar el mínimo margen de libertad que les otorgaba la dictadura.

Se comprenderá por democracia la forma de gobierno en donde se elige mediante votaciones a sus líderes y el poder está sometido a frenos y restricciones. Como lo señala Schumpeter, en una democracia "el método democrático es un dispositivo institucional para decidir posiciones políticas, en virtud del cual los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha competitiva por los votos del pueblo" (Schumpeter, 1950: 269). Algunas de las condiciones para la democracia son: desarrollo económico, estructuras intermedias y liderazgo, (Aron, 1960: 122).

Los actores políticos y sociales que en el trabajo se abordarán son los empresarios, los partidos políticos, las organizaciones sindicales, organizaciones de mujeres, factores externos y movimientos populares de oposición al régimen militar; la importancia de éstos en el estudio de la transición democrática chilena estriba en que, en su conjunto, reflejan los intereses económicos, políticos y sociales que se desarrollan en el proceso de transición.

Esta investigación es el intento por lograr un acercamiento en torno a ¿cuál es el significado de transición?, ¿cuáles son las causas que la originan?, ¿cómo se desarrollan los actores en la transición democrática chilena?, las anteriores son algunas de las interrogantes que dan cuerpo al presente trabajo.

La primera parte de la tesis está compuesta por la búsqueda de bases teóricas que, posteriormente, sustentarán el desarrollo de la misma. Se da un acercamiento a lo que es el fenómeno de transición democrática y cuáles son sus características. Entenderemos aquí por *transición* el paso de un régimen

político a otro, así es como lo describe Manuel Antonio Garretón. Se estudian conceptos básicos como el de liberalización, transición, democratización, entre otros.

En la segunda parte se analizan las condiciones que permitieron el debilitamiento y crisis política en el seno del régimen militar chileno; así como la observación de diversos fenómenos políticos y sociales que llevaron a la tan necesaria apertura política adoptada por el gobierno militar de Augusto Pinochet. Algunas de las condiciones estudiadas son: los problemas económicos a los que se enfrenta el gobierno autoritario, las constantes fricciones surgidas en el interior de las Fuerzas Armadas, las presiones externas que se manifiestan constantemente por un respeto a las garantías individuales y la apertura política. Todos ellos son elementos que explican el surgimiento de grietas en el seno del gobierno autoritario.

En la tercera parte se estudia el comportamiento de los distintos actores que intervienen durante la transición hacia la democracia. Para ello se parte de dos acontecimientos fundamentales: el plebiscito de 1988 y las elecciones parlamentarias de 1990; los cuales influyen de manera determinante en las acciones de diversos sectores de la sociedad, que participan ya sea a favor de la transición democrática o en defensa del gobierno pinochetista. Los actores estudiados son: sindicatos, empresarios, partidos políticos, política externa, mujeres y movimientos populares.

La cuarta parte está constituida por las consideraciones finales, que tienen por objeto unir el desarrollo de la tesis y el proceso de la transición hacia la democracia en Chile.

Este trabajo no pretende ser la última palabra en torno la discusión sobre el tema; es, en sí, el intento por explicar un fenómeno histórico de gran importancia, como lo es el caso chileno.

El trabajo está sustentado en el material que se encontró en El Colegio de México y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; aunque si bien es una vasta bibliografía, son trabajos que representan **una sola línea de pensamiento**; a mi parecer esta es una limitante de peso en la investigación, pues no se cuenta con obras que presenten otro punto de vista, otra línea, otra posición, etcétera. Debido a que son obras editadas en Chile, los interesados en el estudio del caso chileno, desde el exterior, tienen que adecuarse al criterio de selección de la institución encargada de distribuir las investigaciones.

Capítulo 1

CAÍDA DE LOS RÉGIMENES AUTORITARIOS Y TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

La desaparición de los gobiernos autoritarios en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, representa un parteaguas político en la historia de Latinoamérica.

Esta serie de cambios en los regímenes durante la década de los ochenta, me origina una interrogante en torno a los acontecimientos del continente: ¿de qué manera reaccionan los distintos actores políticos en un cambio de régimen hacia la transición democrática?

La imposibilidad de identificar requisitos nos obliga necesariamente a indagar bases teóricas acerca del fenómeno de transición democrática. Para Guillermo O'Donnell y Philippe Schmitter, la transición democrática se entiende como un proceso con fases de transición, consolidación y persistencia analíticamente distintas.¹

El objetivo principal de este primer capítulo es identificar algunas de las etapas y características involucradas en el estudio de los procesos de liberalización de regímenes autoritarios y su reemplazo por formas democráticas de organización política. Es importante señalar que las condiciones aquí estudiadas solamente se refieren a regímenes autoritarios como el caso chileno, formas de gobierno como el régimen cubano no tienen cabida en este tipo de estudio.

La transición democrática representa una etapa de suma importancia, pues al mismo tiempo que se plantea alternativamente frente a dictaduras, se vive una nueva experiencia; ya que las luchas por la democratización de la vida

¹ Por ejemplo, las facciones de la élite y los movimientos sociales, aparentemente desempeñan un papel definitivo en la caída de los regímenes autoritarios, durante la transición en sí, los partidos políticos se colocan al centro del escenario, en tanto las agrupaciones empresariales, los sindicatos, los obreros y las instituciones estatales se vuelven determinantes mayores del tipo de democracia que a la larga se consolida

política, forman parte de un programa de renovación y progreso social, de la voluntad de construir una sociedad distinta, donde la participación popular sea el rasgo definitorio. En ella "los nuevos regímenes políticos democráticos tendrán la capacidad de establecer y respetar las normas destinadas a enfrentar los conflictos sociales inherentes a toda democracia y a resolverlos pacíficamente" (Varas, 1993: 150).

1.1 Caída de los regímenes autoritarios

En general, suelen mencionarse cuatro clases de factores para explicar cómo comienzan a aparecer grietas en estos regímenes y de qué manera se vuelve posible su liberalización.

a) El régimen autoritario ya ha cumplido con las necesidades funcionales que lo llevaron a su establecimiento, por ende deja de ser necesario y se produce su derrumbe.

b) El régimen por una u otra razón -y una de las razones posibles es la mencionada en el punto anterior- ha perdido su "legitimidad", y dado que ningún régimen puede perdurar sin legitimidad se desintegra.

c) Los conflictos existentes dentro del bloque gobernante, en particular entre los militares, no pueden conciliarse internamente por una u otra razón, una de éstas es la mencionada en el punto b, ante lo cual ciertas facciones gobernantes deciden apelar al apoyo de grupos externos. Por consiguiente el bloque gobernante se desintegra *qua* bloque.

d) Presiones externas que impulsan al régimen a "revestirse de una apariencia democrática". Lo que obliga a efectuar transacciones, quizá por medio del mecanismo mencionado en el punto c (O'Donnell y Schmitter, 1988: 19, tomo, 2).

1.2 Transición

De acuerdo con los conceptos manejados en el proyecto titulado *Transiciones desde un gobierno autoritario* y organizado por el Centro Internacional Woodrow Wilson de Investigadores una *transición* es el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro. Una transición está delimitada, de un lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno a algún tipo de régimen autoritario.

"Lo característico en la transición es que en su transcurso las reglas del juego político no están definidas" (O'Donnell, 1988, tomo 4: 19). Es decir no se hallan en flujo permanente sino que, además, por lo general, son objeto de una ardua contienda; en donde los actores luchan no sólo por satisfacer sus intereses inmediatos y los de aquellos que dicen representar, sino también por definir las reglas del juego y procedimientos cuya configuración se determinará, probablemente, entre quienes serán en el futuro los perdedores y los ganadores. Estas reglas definirán en gran medida los recursos que legítimamente pueden aplicarse en la arena política y los actores a los que se permitirá participar

La problemática de la transición política, entendida como cambio de régimen, se diferencia nitidamente de la problemática de la revolución, entendida como proceso de "toma de poder".

Las transiciones pueden desencadenarse de diversas maneras. Ellas pueden originarse desde arriba, ya sea por una apertura exitosa de un régimen que considera su tarea terminada, o por una crisis de descomposición interna, desde abajo, por una acción de las oposiciones que, a su vez puede ser insurreccional o puramente política; o por factores "intermedios" o "externos" al régimen y la oposición, los que pueden ser eventos como una guerra, una

muerte, presión extranjera, o una instancia mediadora por encima de régimen de oposición. Lo más probable es que, aunque un factor pese más que otro, las transiciones combinen de algún modo los tres factores, y de hecho así ha ocurrido en las transiciones históricas.

En las transiciones de regímenes dictatoriales militares a regímenes democráticos, propias de los países del Cono Sur, advierte Antonio Garretón que: "hay dos dinámicas convergentes. La primera es la de crisis interna o descomposición del régimen, muchas veces ligada a la cuestión sucesora o de institucionalización del mismo. La segunda es la creación o movilización de la sociedad, sectores medios y populares especialmente, contra el régimen" (Garretón, 1988: 39).

Estas dos dinámicas convergentes pueden desdoblarse en cuatro procesos, uno relativo al régimen, otro a la oposición de la sociedad, y los otros dos a la relación entre régimen y oposición, constituyendo los componentes básicos de este tipo de transiciones. Ellos son la descomposición interna del régimen o el aislamiento del núcleo gobernante respecto de sus apoyos internos y externos; la movilización social contra el régimen; la negociación entre titulares del poder y oposición; y las mediaciones institucionales y presiones de actores arbitrales.

1.3 Liberalización

Guillermo O'Donnell y Philippe C. Schmitter denominan *liberalización* "al proceso de redefinir y ampliar los derechos" (O'Donnell, 1988, : 20). Entonces se entiende por liberalización el proceso que vuelve efectivos ciertos derechos, que protegen a individuos y grupos sociales ante actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceros. Estas garantías incluyen el hábeas corpus, la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de palabra,

del movimiento y de petición ante las autoridades, etcétera. En el plano de los grupos abarcan la libertad para expresar colectivamente su discrepancia respecto de la política oficial sin sufrir castigo por ello, la libertad en los medios de comunicación y la libertad de asociarse con otros individuos.

Aunque esta complicada serie de garantías, probablemente, nunca es respetada de manera total e incondicional por las autoridades públicas en ningún país, y que su contenido es modificado en el curso del tiempo, constituye una variante importante respecto a las prácticas habituales de los regímenes autoritarios.

Adam Przeworski señala que "dichos movimientos tienen por efecto reducir los costos reales y previstos de la expresión individual y de la acción colectiva. Esto, a su vez, tiene un efecto multiplicador". (Przeworski, 1988, tomo 3: 89) Es decir, una vez que algunos actores se han atrevido a ejercer públicamente tales derechos y no han sido castigados por ello, como lo fueron durante el apogeo del régimen autoritario, aumenta cada vez más la probabilidad de que otros se atrevan a hacer lo mismo.²

1.4 Democratización

El principio rector de la democracia es el de *ciudadanía*. Ello involucra tanto el derecho de ser tratado por los otros seres humanos como igual, con respeto a la formulación de opciones colectivas, como la *obligación* de quienes instrumentan dichas opciones de ser accesibles y responder por igual frente a todos los miembros del sistema político (O'Donnell, 1988: 23). A la inversa, este principio impone a los gobernados la *obligación* de respetar la legitimidad

² Una característica de esta primera etapa de la transición es que depende en forma precaria de las facultades del gobierno, que siguen siendo arbitrarias y caprichosas. Pero si estas prácticas liberalizadoras no constituyen una amenaza evidente e inmediata para el régimen, suelen acrecentarse, se institucionalizan y por tanto, incrementan los costos efectivos y percibidos de su eventual anulación.

de las opciones de la deliberación entre iguales, y a los gobernantes, el derecho de actuar con autoridad (y aplicar medidas colectivas en caso necesario) a fin de promover la eficacia de esas opciones y proteger al sistema político de toda amenaza a su perduración.³

La democratización está referida a aquellos procesos en los cuales las normas y procedimientos de la ciudadanía son, o bien aplicados a instituciones políticas antes regidas por otros principios, por ejemplo, el control colectivo, la tradición social, el juicio de los especialistas o las prácticas administrativas; o bien ampliadas a modo de incluir a individuos que antes no gozaban de tales derechos y obligaciones, por ejemplo, las personas que no pagan impuestos, los analfabetos, las mujeres, los jóvenes, las minorías étnicas y los residentes extranjeros; o para abarcar problemas e instituciones que antes no participaban de la vida ciudadana, por ejemplo: organismos del Estado, militares, organizaciones partidarias, asociaciones de intereses particulares, empresas productivas, entidades educativas, etcétera.

Por otro lado, cuando se habla de democratización o redemocratización políticas, específicamente de transiciones desde dictaduras a regímenes democráticos se plantea el problema operacional de cuándo ellas comienzan y cuándo ellas terminan, lo que empíricamente es difícil de precisar. En términos generales, parece conveniente tratar de escapar a la definición de plazos y mecanismos oficialmente establecidos para definir la transición, y entenderla como el proceso que va desde la crisis terminal del régimen militar hasta las

³ Gran variedad de normas y de procedimientos participativos han pretendido encarnar este principio de ciudadanía. Las instituciones reales de la democracia han presentado considerables diferencias a lo largo del tiempo y en diversas organizaciones políticas. No hay un conjunto único de instituciones o normas específicas que por sí mismas definan a la democracia, ni siquiera algunas tan destacadas como el voto mayoritario, la representación territorial, la soberanía legislativa o la elección de un poder ejecutivo por el voto popular.

primeras elecciones democráticas, aunque ello deje aspectos de la democratización política por completar.

1.5 Interacción entre liberalización y democratización

Como se ha podido ver en los apartados anteriores, liberalización y democratización no son sinónimos, aunque ha habido entre ambos una estrecha relación histórica. Sin las garantías de libertad individual y colectiva que entraña la primera, la segunda corre el riesgo de degenerar en un mero formalismo. Si no hay una responsabilidad ante las masas e institucionalización de grupos minoritarios; en el segundo caso, la liberalización puede ser fácilmente manipulada según la conveniencia de los gobernantes. Sin embargo, en el curso de la transición ambas pueden no darse simultáneamente.

Los gobernantes autoritarios pueden tolerar y hasta promover la liberalización en la creencia de que, al abrir ciertos espacios para la acción individual y colectiva, pueden aliviar diversas presiones, y obtener así información y apoyos necesarios sin alterar la estructura de autoridad.

O'Donnell y Schmitter afirman que "la liberalización es una cuestión de grado, aunque en términos estrictos no puede medírsela de acuerdo a una escala común para todos los casos" (O'Donnell, 1988, tomo 4: 24). Es decir, puede ser más o menos avanzada según los alcances de las garantías que brinda y según el grado en que las personas y grupos pueden obtener una rápida y eficaz protección contra eventuales transgresiones.

"También la democratización admite gradaciones, aunque nuevamente resulta difícil especificar, fuera de los diversos contextos nacionales y épocas, qué reglas y procedimientos son más o menos democráticos" (O'Donnell, 1988, tomo 4: 21). Sin embargo, puede haber liberalización sin democratización. Es

posible que se otorguen garantías fundamentales y a la vez se impida a los individuos o grupos participar en elecciones libres. Esto suele justificarse sobre la base de que los sujetos "inmaduros" necesitan una tutela antes de poder ejercer plenamente sus responsabilidades ciudadanas.⁴

1.6 Incertidumbre y Transición a la Democracia

"El establecimiento de la democracia es un proceso de institucionalización de la incertidumbre" (Przeworski, 1988: 91), en este mismo proceso todos los intereses están sometidos a la incertidumbre. En un régimen autoritario, por ejemplo, ciertos grupos (típicamente las fuerzas armadas) poseen la facultad de intervenir toda vez que el resultado de un conflicto sea contrario a su programa o a sus intereses. De esta manera, la situación es incierta sólo desde el punto de vista de algunos grupos, mientras que otros grupos tienen un alto grado de control sobre la situación, ya que no se ven obligados a aceptar desenlaces indeseables para ellos.

En una democracia, ningún grupo puede intervenir cuando los resultados de los conflictos perjudican sus intereses, tal como él los percibe. La democracia significa que todos los grupos deben someter sus intereses a la incertidumbre. Es precisamente este acto de enajenación del control de los resultados de los conflictos el que constituye el paso decisivo hacia la democracia.

Como se ha señalado con anterioridad, el concepto de transición lleva envuelta una cierta ambigüedad, en la medida que si bien se sabe de dónde se parte (un régimen militar o dictatorial o régimen autoritario) no hay una necesidad histórica de su punto de llegada, sino que los resultados de las

⁴ En ocasiones para concebir la transición es necesario y conveniente que la democracia política se alcance sin una movilización violenta y sin una discontinuidad espectacular.

transiciones son inciertas y, por lo tanto, cuando ellas no se han desencadenado aún o están en proceso, imputarles un sentido o resultado final puede llevar a la total incomprensión de la real significación de los procesos en curso.⁵

⁵ En este sentido, el término de una dictadura o un régimen militar puede llevar a diversos regímenes como recemplazo y no sólo al democrático.

Capítulo 2

PROCESOS Y ACTORES QUE DAN APERTURA A LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN CHILE

El presente capítulo tiene por objeto analizar las distintas condiciones que caracterizan la crisis del régimen militar chileno; así como la observación de diversos fenómenos políticos y sociales que llevaron a la necesaria apertura hacia la transición democrática; algunos de ellos son: los problemas económicos a los que se enfrenta el gobierno de Pinochet, las fricciones que se dan dentro de los grupos militares en el poder, las presiones externas que no dejan de ser una carga constante para la dictadura, así como el descontento de la población de la población en general, lo que incluye a diversos sectores como las amas de casa, trabajadores y un importante sector que es el de los pequeños empresarios, lo cual va a originar una marcada división en el seno de este gremio entre los grandes y medianos empresarios. Estos diversos actores impulsan, cada uno con sus propias bases, el inicio de una lucha abierta contra las políticas del gobierno militar (principalmente de orden económico y rechazando la violación a los derechos humanos). Todos ellos son factores que explican el surgimiento de grietas en el seno del régimen: la falta de "legitimidad", desintegración del bloque gobernante, es decir los militares, así como las movilizaciones nacionales de protesta y las presiones externas dan impulso al régimen militar de Augusto Pinochet, a implementar políticas mínimas de apertura democrática que originan el proceso de transición hacia la democracia como veremos a continuación.

2.1 Crisis económica

Entre 1981 y 1982 el gobierno de Pinochet se vio sacudido por severos problemas de origen económico. El primer momento crítico para la política económica, lo constituyó la brusca disminución de los préstamos internacionales a consecuencia de las medidas tomadas por los Estados Unidos a fin de subir la tasa de interés interna. Este decrecimiento de crédito vino acompañado por una profunda recesión de alcance global durante los primeros años de la década de los años 80.¹ El auge económico chileno había sido financiado con ahorro externo y el sector privado se encontraba fuertemente endeudado y en 1981 era el responsable por el 83.9% de la deuda externa neta chilena (Silva, 1993: 193).

Como respuesta al problema, el gobierno militar reaccionó implementando una serie de ajustes al modelo económico.² Se pueden distinguir dos etapas de su desarrollo: una transicional o inicial que va de 1975 a 1985, y otra de consolidación, de 1986 en adelante. Chile vivió la fase inicial más larga de todas las experiencias políticas de ajuste a largo plazo.

Las medidas de políticas económicas que pueden considerarse a largo plazo fueron:

- a) apertura comercial y financiera;
- b) reestructuración del sector público, la cual incluyó la privatización de gran cantidad de empresas públicas;

¹ Estas condiciones económicas fueron el detonante de una ola de protestas sociales.

² El gobierno militar impulsó, mediante su política neoliberal una fuerte reestructuración económica, aunque realmente este ajuste reestructural comenzó en 1975. Como resultado de esto, los partidarios de Pinochet pudieron justificar su voto por el gobernante militar en el plebiscito de 1988, citando el éxito de su gestión económica, mientras que sus oponentes basaron su oposición extremadamente desigual de los beneficios del crecimiento. Los éxitos y fracasos del modelo de economía abierta definieron el marco en el cual se plantearon los principales debates y cuestiones que delimitaron el perfil de la transición.

- c) redefinición del papel regulador del Estado, y abandono de las políticas de intervención respectivas;
- d) reforma del sistema financiero sobre bases más competitivas;
- e) cambio en precios relativos clave para redefinir en forma acorde el sistema de incentivos provisto por la política macroeconómica;
- f) desarticulación de la actividad y poder de negociación sindicales (Barrera, 1994: 105-106).

La prolongada fase de la primera etapa de reestructuración económica, es decir, la transicional, acarrió al país una aguda crisis recesiva durante los años de 1982 y 1983, esto provocó que se desarticulara la evolución económica que se había experimentado en años anteriores. El costo social que trajo consigo el ajuste a la economía se prolongó de tal forma que fue un costo social muy elevado para Chile. De esta forma lo ilustra el siguiente cuadro, en donde se resume el dramático costo social que significó la situación económica para los sectores sociales más desprotegidos del país.

**Porcentaje de hogares en situación de indigencia y pobreza
Santiago de Chile, 1969-1991.**

	1969		1979		1989		1991	
	%	%acum	%	%acum	%	%acum	%	%acum
Indigentes	8.4	8.4	11.7	11.7	14.9	14.9	10.1	10.1
Pobres	20.8	28.5	24.3	366.0	26.3	41.2	21.6	31.7
No pobres	71.5	100.0	64.0	100.0	58.8	100.0	68.3	100.0

FUENTE: Barrera, 1994: 115.

A fines de 1982, las reservas internacionales habían caído entre casi US\$ 15 billones, y después de haber alcanzado un cómodo superávit de \$1.5 billones en 1980, la balanza de pagos pasó a mostrar un alarmante

déficit de 1.1 billones. La tasa de interés anual a corto plazo se disparó del 12% que era en 1980, hasta llegar a ser de 39% y 35% en 1981 y 1982, respectivamente. Las quiebras alcanzaron un número sin precedentes, y el desempleo, que era de un 25% en diciembre de 1982, subió a un 30% para fines de 1983 (Silva, 1993: 217-18).

Como secuela de la crisis y del posterior reajuste de la economía, fue posible detectar -por vez primera-, algunas fisuras en el, hasta entonces consistente, frente de los partidarios del gobierno. Ciertas élites económicas hicieron público su descontento. Una pequeña pero activa derecha democrática hizo su aparición y volcó sus esfuerzos a la promoción de la liberalización.

El colapso de la economía chilena fue el detonante que activó un movimiento de protestas que sacudió al régimen. Durante tres años la oposición organizó todos los meses un 'día de la protesta nacional'. Estas protestas fueron inicialmente promovidas por el movimiento laboral, pero pronto la clase media y los renacientes partidos políticos se integraron y asumieron su control. El régimen hizo todo lo posible para reprimir los tumultos por la fuerza. Las protestas unieron el repudio al autoritarismo con el rechazo a las reformas económicas. La gran mayoría de los chilenos levantaron su voz en contra de un modelo económico que les había acarreado demasiadas restricciones.

En el seno de los altos mandos de la Marina, de la Fuerza Aérea y de los Carabineros se empezó a hacer manifiesto un creciente descontento ante la perspectiva de una perpetuación de Pinochet en el poder,

aunque, como contrapeso el ejército se mantuvo monolíticamente leal a su Comandante en Jefe.³

Fue entre 1983 y 1984 cuando las apremiantes necesidades de la administración de la crisis obligaron al gobierno a alejarse en mayor medida del modelo neo-liberal. El creciente ímpetu de las protestas de masas presionaron, incluso, a que un gobierno autoritario como el de Pinochet terminara por sentir la necesidad de lograr al menos un consenso mínimo por parte de la sociedad, sin el cual la gobernabilidad se iba haciendo imposible. Finalmente las autoridades dieron luz verde a medidas económicas destinadas a reactivar la economía y reducir las tasas de interés. Así mismo, ante la presión de los organismos de cúpula empresariales, se terminaron por abandonar las políticas del periodo anterior.

2.2 Pugnas internas en las Fuerzas Armadas

Uno de los temas más controvertidos en las últimas décadas ha sido el papel de las Fuerzas Armadas en las transiciones democráticas. Aquí se analizarán las características de la crisis de legitimidad que permite entender la derrota plebiscitaria del régimen militar.

Una primera fuente de pérdida de legitimidad del régimen militar chileno y su proyecto de fundación política fue de carácter institucional. En la medida que liberalizó, desestatizó y privatizó la actividad económica, la radicalidad de sus medidas reveló abruptamente la tensión entre un aparato estatal activamente involucrado en la transformación económica y la permanente ausencia de mecanismos

³ Por otra parte, las protestas y movilizaciones masivas de los años 1983-1984 pusieron en peligro el calendario y el trayecto que el régimen había fijado y previsto para el proceso de transición política.

de legitimación de ésta acción y sus instituciones derivadas (Varas, 1993: 157).

Esta disolución sólo pudo mantenerse temporalmente bajo las condiciones excepcionales de vigencia al argumento de la seguridad nacional, durante el breve periodo de los tres primeros años del régimen militar. El régimen no contó con un apoyo masivo al marco constitucional que intentaba legitimar.⁴

Un primer problema que tuvo que resolver el gobierno militar fue el de su hegemonía interna. Aun cuando en los inicios del su gobierno estaba clara la forma de composición de la Junta Militar, no estaba igualmente visualizado su futuro institucional. Esa primera etapa se caracterizó por la progresiva clarificación de las expectativas de cada institución sobre su inserción en el gobierno y el país. La jerarquización de las Fuerzas Armadas y Carabineros desde el Ejército fue posible gracias a su capacidad militar y su histórica preeminencia institucional. Así, el Alto Mando del Ejército logró consolidar su posición, constituyéndose al mismo tiempo en poder Ejecutivo.

Por otro lado, en la medida que el resto de las ramas se distanciaron del gobierno, permitieron la dirección indisputada del núcleo hegemónico Ejecutivo-Alto Mando. Con ello, el proyecto de las reformas sociopolíticas y económicas pudo pasar a manos de los sectores civiles neo-liberales sin grandes oposiciones castrenses (Ascanio, 1988: 35).

⁴ Así lo muestra el amplio apoyo político y ciudadano a las reformas constitucionales en 1989, reformas que entre otras cosas planteaban el llamado al plebiscito que más adelante perdería Pinochet. Tampoco logró que la despolitización de los espacios públicos, a través del militarismo cívico, generara lealtades masivas mayoritarias a sus nuevas instituciones económicas y políticas. Ello fue producto de la crisis distributiva que enfrentó hasta su término.

Un nuevo perfil de las relaciones intra-militares comenzó pronto a generar nuevas dinámicas políticas. En primer lugar, al interior de Carabineros se advirtió una tendencia más autónoma frente al ejército. Toda vez que este último tenía el control de los organismos de inteligencia con dispersión territorial, su única contraparte real era Carabineros. En segundo lugar, al interior de la policía uniformada habían surgido tendencias que disputaban el campo de la contrainsurgencia al Ejército. Estos dos elementos se combinaron, dando por resultado una crisis de magnitud, como consecuencia de ello, debió renunciar el Director General del cuerpo policial en agosto de 1985.⁵

Después de la crisis, el nuevo mando aéreo opta entonces por fortalecer la identidad institucional, se distancian relativamente de la gestión gubernamental, fortalecen su ser corporativo con la creación de la Empresa Nacional de Aeronaves (ENAER), por ejemplo, y actúa de manera más flexible en materias políticas nacionales.

Finalmente, la Armada, producto de diferencias con el Ejecutivo se fortalece en las comisiones legislativas que dirige, con lo cual mantiene una capacidad de negociación en temas de interés institucional.

Las nuevas necesidades de subordinación de las FF.AA. crearon tensiones al interior del Alto Mando del propio Ejército, dando por resultado cambios en la representación de esa arma de la Junta Militar, saliendo el general Benavides y siendo reemplazado por el general Sinclair a fines de 1985 (Varas, 1993: 162).

La Junta de Gobierno, creada en 1980 y operativa en 1981, tiende a coincidir con la crisis económica que se desata en 1982. Tal situación es

⁵ En el caso de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), las posiciones políticas de su Comandante en Jefe dan por resultado una intervención por parte del Ejecutivo-Alto Mando, removiéndolo de su cargo.

una aliciente adicional para que los jefes institucionales, a través de su gestión legislativa, asuman sus responsabilidades de co-gobierno; por ejemplo, en materias tan delicadas en ese momento como las económicas. Todos estos procesos ponen a prueba la unidad política de las Fuerzas Armadas, permitiendo una mayor fluidez de influencias y contrabalances frente al Ejecutivo, el cual va perdiendo la capacidad de encuadramiento político al interior del régimen.⁶

Una fisura adicional de importancia se creó entre el Ejército y el resto de las instituciones armadas cuando el General Pinochet opta por ser candidato único al plebiscito.

La actitud del Ejército en la campaña plebiscitaria generó una aguda controversia legal. La oposición afirmaba que jurídicamente las FF.AA. no podían involucrarse activamente en política, aún cuando el gobernante fuese el Comandante en Jefe del Ejército. Por el contrario, la relación era entendida por el ejército como de lealtad irrestricta, lo cual fue señalado por el Ministro de Defensa (Drake, *et.al.*, 1993: 25).

Por su parte, la marina se manifestó en contra de la candidatura de Pinochet puesto que la fórmula del general no la convenía del todo, en particular no coincidía que se mantuviera en la comandancia el jefe del ejército siendo candidato presidencial.

2.3 Presiones internacionales

Desde el inicio de la liberalización, en agosto de 1983, hasta el plebiscito de octubre de 1988 hay más de cinco años de un largo, lento y no

⁶ En este periodo se estructura un campo de fuerzas mucho más diversificado y, por lo tanto, más dinámico que permite identificar con mayor claridad el campo político, en el seno del gobierno, en la Junta de Gobierno y al interior de cada rama de las Fuerzas Armadas. El mínimo común denominador que cohesionaba políticamente a las instituciones armadas en ese último periodo era su convicción de finiquitar la tarea gubernamental en las fechas estipuladas por el marco institucional.

siempre lineal proceso de apertura, de esta forma el cuestionamiento ahora es: ¿cuál fue la incidencia de los factores externos en este proceso? Para comprender la interrelación entre políticas externas de apoyo a la transición, actores domésticos y resultado del proceso se estudiara el contenido de la política de los principales actores internacionales frente a la transición a la democracia en Chile; así como la prioridad de esa política dentro de una gama de objetivos de política exterior de los principales actores internacionales que se examinarán y los medios utilizados por esos actores para llevar adelante sus políticas; también las respuestas del gobierno militar chileno a esas influencias externas.

Diversos actores internacionales establecieron como una de sus metas de acción internacional la promoción de la democracia. Desde 1982 fue uno de los objetivos más enfatizados de la política exterior de Estados Unidos, luego de la reevaluación que la Administración Reagan hiciera de la criticada política de derechos humanos del presidente Carter (Portales, 1987: 360).

En el caso chileno, la visión estadounidense de la transición estaba muy marcada por el potencial rol del partido comunista en el régimen post-autoritario.⁷

El apoyo a la transición democrática como objetivo de la política exterior de un país no es, sin embargo, el único ni muchas veces el más importante objetivo de su acción internacional en relación a un

⁷ Las reticencias frente a la transición fueron reveladas por el Subsecretario de Estado Asistente para Asuntos Interamericanos, James Michel en su discurso en la Universidad de Arkansas el 1º de diciembre de 1984, que exponía una visión del gobierno norteamericano frente a la situación chilena, enfatizando la influencia que se preveía podía llegar a tener dicho grupo en un sistema político que era percibido como carente de los consensos básicos para restablecer una democracia estable.

determinado país. Para entender el alcance de este objetivo político es preciso entonces analizar: a) el contexto de relación con los otros objetivos internacionales de un país; b) en relación a los medios de acción externa que un gobierno esté dispuesto a utilizar para conseguir ese objetivo; y c) en el marco de la apreciación de la situación interna del país en el cual se quieren obtener resultados (Portales, 1993: 468).

La política de Estados Unidos durante la administración Reagan, después de un acercamiento inicial al gobierno de Pinochet, fue reevaluada (en el contexto de la nueva política en favor de la democracia) debido a la contumacia del régimen militar y como resultado de la crisis provocada por las protestas en 1983. Se trató de un proceso largo que comenzó a abandonar la "diplomacia silenciosa".⁸

La presión político-diplomática fue realizada mediante mensajes abiertos y discretos, por declaraciones en Washington y Santiago, por actos simbólicos y mediante pronunciamientos de las organizaciones internacionales. Fue aplicada para favorecer el respeto a los derechos humanos, evitar atropellos, prevenir y reparar los retrocesos en el proceso de liberalización, apoyar a los actores internos que podían favorecer un proceso de transición preferido por Washington y finalmente lograr garantías para el desarrollo de un proceso plebiscitario en condiciones las más cercanas posibles a una elección democrática.

En la misma dirección se utilizaron los medios de presión económica. Debido a la crisis externa, el gobierno chileno estaba en una posición especialmente vulnerable frente a la obtención de los recursos

⁸ En 1983 comenzó Estados Unidos a realizar pronunciamientos abiertos sobre la situación de los derechos humanos y la institucionalidad chilena. Se concluyó en favorecer activamente una transición gradual y negociada propiciando la restauración de la democracia por medio del diálogo entre las fuerzas en pro de la transición.

financieros externos. A partir de 1981, con la retracción de la banca privada, el sector público externo, particularmente los organismos financieros internacionales, volvió a ser clave para la obtención del financiamiento externo, ya no sólo para lograr un crecimiento mínimo, sino aún para servir a los cuantiosos intereses de la deuda externa (Muñoz, 1987: 28).

Los países de Europa Occidental afirmaron su preocupación por la situación de los derechos humanos y su respaldo a la transición democrática en Chile. Las prioridades de este objetivo y la intensidad con que fueron buscados, variaron entre los diversos países y, en algunos casos, debido a cambios en la orientación del gobierno.⁹

La política de los países latinoamericanos, en particular la de los países de América del Sur, cambió como resultado de las transiciones a la democracia en este subcontinente. El apoyo de un proceso a la transición a la democracia en Chile se incorporó a los objetivos de política exterior de esos países.¹⁰

En el terreno político, en los años ochenta se intensificaron las relaciones en el plano de los actores no gubernamentales. En este sentido, uno de los subproductos del exilio chileno fue la variada y fluida calidad de los contactos personales de la élite opositora con las élites de otros países de América Latina -así como también de Europa- que da acceso a los partidarios de una transición democrática y ha permitido

⁹ La política de los gobiernos europeos frente a Chile estuvo marcada por la situación general del país, por violaciones de derechos humanos a ciudadanos de los países europeos y por acciones o declaraciones de diplomáticos y autoridades europeas que pusieron en confrontación directa a determinados gobiernos con Santiago.

¹⁰ Los medios que utilizan los países de la región para manifestar esta posición son fundamentalmente políticos, utilizan declaraciones gubernamentales, votaciones en los organismos internacionales y gestos simbólicos como las invitaciones a delegaciones opositoras a las transmisiones del mando de los gobiernos democráticos.

activar campañas específicas en favor de la protección de los derechos humanos durante el proceso de transición y mantener la atención de las fuerzas de esos países en el caso chileno.

Otros actores internacionales que presionaban por cambios en la situación de los derechos humanos y en favor de la democratización en Chile fueron las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y en menor medida la Organización de Estados Americanos, y organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Americas Watch, etc.

Frente al cúmulo de presiones externas por revertir la conducción interna, el gobierno chileno invocó sistemáticamente el principio de no intervención en los asuntos domésticos, cuando las acciones externas eran muy directas o reiterativas. Sin embargo, en muchas oportunidades el propio gobierno chileno, directa e indirectamente, fue respondiendo a esos requerimientos; por ejemplo, accediendo a los salvoconductos de varios asilados, revocando algunas medidas contra ciudadanos extranjeros, dando satisfacción a algunas demandas internas; todo ello, sin aparecer cediendo directamente.

En los asuntos de derechos humanos fue la presión externa la que contribuyó decisivamente a la cooperación con el Relator Especial Fernando Volio, alternando su negativa previa a permitir el ingreso al país del Relator Especial de Naciones Unidas para la preparación de sus informes anuales (Portales, 1993: 467).

En el plano institucional, el gobierno eludió el efecto de las protestas con la apertura en agosto de 1983, que hizo disminuir la presión externa, pero muy pronto se canceló el diálogo con la oposición y cuando la

iniciativa antigubernamental repuntó, replicó con el estado de sitio. La presión externa fue un instrumento para su levantamiento en 1985.

Desde la perspectiva del gobierno, la puesta en marcha de las instituciones permanentes de la Constitución de 1980 iba a ser la única respuesta a las presiones de apoyo a la transición que se hacían sentir sobre Santiago. Para ello se reorganizó el gabinete entregándose la cartera del Interior a Sergio Fernández, quien había estado en el cargo durante el plebiscito organizado para aprobar la Constitución de 1980. Se trataba de buscar un reconocimiento y la vigencia total de la Constitución, establecer un sistema electoral y leyes políticas y mantener firme el procedimiento para designar el candidato a la Presidencia que debía ser plebiscitado en 1988 (Ascanio, 1988: 483).

Cuando el 2 de febrero de 1988 los partidos de la oposición se reunieron en la Concertación de Partidos por el NO, aceptando implícitamente el marco institucional, cuando menos en este hito, las condiciones del acto se convirtieron en el elemento clave del proceso de desenlace del proceso. El establecimiento de las normas y prácticas de este proceso no estuvo exento de debates al interior del régimen y del gobierno.¹¹

Durante quince años el gobierno militar experimentó un proceso de aprendizaje frente a las influencias externas. Así, durante el periodo de 1983-88 se puede apreciar una mayor capacidad para evaluar el alcance de las presiones, que en el periodo anterior. Cuando éstas se dieron en forma amplia y en puntos particulares sensibles para el

¹¹ En este sentido, la presión internacional y la necesidad de encontrar cierta legitimación externa del proceso ayudaron a que la dinámica de institucionalización diera por resultado un procedimiento que permitió la expresión ciudadana.

régimen, como en la obtención de créditos externos en 1985, el gobierno cedió, no sólo sin tomar ciertos resguardos. Sin embargo, los grados de vulnerabilidad variaron como efecto del desempeño de la economía y también de la capacidad de detectar y sacar partido de las diferencias en los propios actores externos que la ejercían.

2.4 Acción sindical en el periodo de apertura

La actitud de lucha por el cambio y la conciencia antidictatorial desempeñaron un papel muy importante como signos activos de una sociedad violentada y reprimida por el régimen militar, que logró fundar las bases de procesos tan importantes como el de la transición democrática chilena.

Sin embargo, el papel fundamental en el plano político social no siempre pudo ser acompañado por una acción organizativa de la base laboral en términos equivalentes, esto se debió a la fuerte represión económica y política que impidió desarrollar, con toda la potencialidad necesaria, un sistema de relaciones sindicales consistente entre la dirección y la base (Abramo, 1991: 129).

Para ello, los esfuerzos de la dirigencia nacional lograron siempre mantener mecanismos de articulación, los cuales serán la semilla de su reestructuración posterior.

Pese a los esfuerzos de los guías se produjeron vacíos entre la acción sindical nacional contestataria hacia la dictadura y la vida laboral en la base sindical. Mientras la dirigencia sindical desempeñaba algunas tareas en el plano de la oposición política y social en el país, los trabajadores, en las empresas y otros lugares de trabajo, en muchas ocasiones carecieron de orientaciones concretas para enfrentar sus

problemas laborales y al mismo tiempo estaban desprovistos de mecanismos adecuados de articulación con las organizaciones nacionales y federativas.

Sin duda, era difícil que los representantes sindicales -perseguidos, con pocos recursos y con muchos de sus cuadros expulsados-, pudieran cumplir un sistemático papel organizador y formador en sus bases, con condiciones tan desfavorables. Ello hizo que muchos jóvenes trabajadores, opositores al régimen y dispuestos a asumir los riesgos de encarrilar un sindicato, tuvieran que enfrentar, con gran fragilidad de recursos formativos, estos desafíos, en particular durante el periodo de organización sindical que impulsó el Plan Laboral desde finales de la década de los años setenta. De este modo, el capital social que significa la formación de un masivo cuerpo de dirigentes y que siempre es un proceso de largos años, se vio gravemente limitado.¹²

Aun cuando el movimiento sindical desempeñó un papel importante frente al autoritarismo militar, la base sindical no escapó a los efectos desestimulantes que se derivaron de la posición subordinada en donde la colocó el proceso económico, social y político de esos 16 años (Abramo, 1991: 138). En efecto, las bases del sindicalismo de la pequeña y mediana empresa, como resultado de las crisis que tuvieron que afrontar; estuvo marcada, en ciertos momentos, por una psicología de defensa hacia sus propios intereses que asertiva frente al empresariado.¹³ El cuadro que a continuación se presenta refleja la cruda situación de

¹² Este hecho va a ser un elemento de importancia para la participación sindical en la transición, pues deberá recuperar en un tiempo más breve, lo que normalmente es el resultado de largos periodos de formación de un cuerpo sólido de dirigentes.

¹³ A diferencia de Argentina, pero sobre todo de Brasil, el sindicalismo chileno sufrió una reducción sistemática de su núcleo obrero industrial, minero y de la construcción, que constituía su columna vertebral.

desempleo que tuvo que enfrentar el sindicalismo chileno en esos momentos de recesión económica.

Tasa de desocupación nacional, 1977-1992

Tasa de desocupación ^a		
1977	11.8	17.7
1978	14.1	18.3
1979	13.6	17.5
1980	10.4	15.7
1981	11.2	16.1
1982	19.4	26.4
1983	15.0	28.5
1984	15.5	24.6
1985	12.2	21.0
1986	8.8	13.9
1987	7.9	10.8
1988	6.3	7.0
1989	5.3	5.3
1990	5.7	5.7
1991	5.3	5.3
1992	4.4	4.4

FUENTE: Barrera: 1994, 117.

^a Se manejan dos datos: uno del INE y otro de ODEPLAN.

Solamente después de superada la recesión económica de 1982-1983, estos sectores lograron una recuperación relativa. Por otro lado, los trabajadores beneficiados, que impulsó el modelo económico, se caracterizaron por la desorganización social y por ello su fuerza sindical fue muy poca (esto se dio sobre todo en sectores como el de la agricultura de exportación, el maderero, entre otros, donde predomina el trabajo de temporada).

En circunstancias como estas los trabajadores prefieren defenderse del abuso y arbitrariedad del empleador que mantener una lucha en conjunto y en beneficio del sector sindical.

Sin embargo, la apertura del proceso de transición crea un espacio relativamente mejor para que los sindicalistas desarrollen, en sus bases, las iniciativas que, desde el punto de vista sindical, han venido proponiendo las direcciones nacionales en aspectos como modernización, la manera de relacionar productividades e Ingresos, estrategias de crecimiento y distribución. Ello requería superar la posición defensora de la base y abrirse a una posición más asertiva.

Durante las primeras manifestaciones de apertura los síndicos intentaban bloquear el respaldo partidario, el cual había constituido una característica histórica del sindicalismo chileno, lo cual tuvo resultados de distinto tipo. Por un lado, contribuyó a que el movimiento sindical se enfrentara, con sus propias fuerzas, a problemas emergentes. Por otro, le propició una relación directa con otros grupos sociales, situación que sólo se había dado por medio de sus relaciones con los partidos (Barrera, 1990: 229).

Lo anterior no quiere decir que los partidos no estuvieran presentes, pues siempre mantuvieron una vinculación con el liderazgo sindical. Es importante destacar que esta condición de relativa debilidad de la participación partidaria contribuyó a que los sindicatos elaboraran políticas más propias y concibieran la lucha sindical desde un punto de vista más autónomo, ello permitió que, pese a las diferencias partidarias, la idea de la unidad sindical ganara terreno, como lo comprueba la formación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que reúne en su seno tendencias políticas muy diversas, esta tendencia se confirma con

la afiliación a la CUT, de un importante sector de la Central Democrática de Trabajadores (CDT), la cual representa otra central nacional creada antes que la CUT.

En estos momentos de apertura hacia la transición tuvo origen un debate en el que se cuestionaba la total autonomía de los sindicatos con respecto a los partidos políticos, cuando la separación de los sindicatos se vio fragmentada, debido a su relación más directa con los partidos políticos, poco a poco perdió vigencia esta polémica, pues esta relación fue aceptada plenamente por las direcciones sindicales nacionales.

Sin embargo, esta concepción de autonomía relativa, vinculada con los partidos, no siempre estuvo clara durante los primeros momentos de apertura. Así, en ocasiones, el partidismo fue un obstáculo. Y en la medida que surgía una lucha más amplia, las relaciones se hicieron más fluidas. En estas se contó con la ayuda, entre otras, de asesores políticos que facilitaron la relación, lo cual fue importante también para establecer vínculos fluidos entre el sindicalismo y la Concertación de Partidos por la Democracia. Esta nueva concepción más flexible, que no descartaba la vinculación partidaria, pero que dentro de ella reivindicaba la personalidad social del sindicalismo, continuó madurando y perfeccionándose, y con ello el protagonismo de los sindicatos creció.

2.5 Las mujeres chilenas frente a la apertura

Este apartado no tiene por objeto demostrar la participación de la mujer desde un punto de vista feminista, sino como parte de los actores que coadyuvan a la construcción de un sistema de vida con mayores posibilidades de bienestar social para la sociedad chilena.

Fue irónico que durante el gobierno de Pinochet -régimen surgido bajo la bandera defensora de la institución más tradicional: la familia- se tuviera que enfrentar a la denuncia de mujeres que se movilizaron en defensa de la integridad de sus hogares, amenazada por la represión de la dictadura.

A partir de entonces surgieron organizaciones en donde la mujer participa, por ejemplo, la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, junto a la de Familiares de Prisioneros Políticos desarrollaron, en forma pública, después del golpe, las primeras actividades de denuncia y oposición al régimen (Frühling, 1985: 116).¹⁴

Los problemas políticos y económicos que tuvo que enfrentar el régimen militar afectaron profundamente a la mujer como sector social. Debido a esta situación, diversos grupos de mujeres se organizaron y ocuparon nuevos espacios, reemplazando las expresiones de participación política prohibidas por el régimen; ellas se movilizaron por la defensa de la vida, la supervivencia y la política. El gobierno militar enfrentaba la resistencia de este sector, cuyas nuevas organizaciones, opciones y actividades se convierten en gérmenes de cambio, al mismo tiempo que presionan por la construcción redemocratizadora de la sociedad en su conjunto.

En periodo de apertura política marcó, desde 1983, un momento de importantes manifestaciones y movilizaciones de mujeres y también de reconstrucción de los partidos políticos.¹⁵

¹⁴ Estas organizaciones de Derechos Humanos nunca asumieron una identidad de género, pues su foco de atención eran las víctimas de la represión.

¹⁵ Diversas formas de relación se establecen desde entonces, y aunque el movimiento de mujeres no logró mantenerse unido durante la primera etapa de la transición, este tema adquirió gran importancia, llegó a constituir un eje en torno al cual se articularon diversas posiciones en cada una de las instituciones sociales y políticas como veremos en el capítulo siguiente.

Cabe destacar que las mujeres desempeñaron un papel importante en este momento de crisis económica. A consecuencia de la caída en los ingresos familiares, por el alto índice de desempleo, numerosas amas de casa se tuvieron que incorporar al campo de trabajo. El desempleo en esos momentos llegó a representar un 30% de la fuerza de trabajo en el país y un 80% de la misma en sectores periféricos del Gran Santiago (Serrano, 1988: 25).

La deteriorada situación económica originó que fuertes contingentes de este sector iniciaran diversas estrategias colectivas de sobrevivencia. Se crearon así, talleres de autosuficiencia, *comprando juntos* es uno de ellos, otro es *ollas comunes*, talleres artesanales entre otras otras organizaciones económicas populares, que sólo en el Gran Santiago superaban el millar en 1985. En su mayoría estas organizaciones estaban compuestas por amas de casa, de esta manera ellas intentaban solucionar los problemas más elementales de la alimentación y subsistencia de sus familias, frente a un Estado que había perdido su carácter benefactor.¹⁶

Aún cuando las nuevas organizaciones económicas creadas por las mujeres tenían como principal objetivo la solución de los problemas de supervivencia, éstas se convirtieron rápidamente en focos de organización política y desarrollo. Estos grupos conservaron altos grados de autonomía, y la mayor parte no estableció relación directa con las instancias partidarias.

¹⁶ En los hogares más pobres, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo significó muchas veces el retiro de sus hijas de la escuela, para reemplazar a la madre en las tareas del hogar. Por otra parte, aumentó el número de mujeres que estaban a la cabeza de su hogar, ello se debió, en parte, a consecuencia de la migración de sus esposos en busca de oportunidades laborales, y también por la dificultad de los desempleados en busca de trabajo.

Las movilizaciones femeninas tomaron su carácter más amplio y significativo solamente al inicio del periodo de la apertura política. Sus marchas se situaron más en el contexto de lucha antidictatorial, que en el de reivindicaciones de género. Después de la creación del Movimiento Feminista, en 1983, su causa trascendió rápidamente a los sectores populares, aunque, cabe destacar, con un carácter diferente al de las expresiones que tomó entre mujeres de clases medias, rompiendo el mito de que sus preocupaciones reflejaban sólo los intereses de las mujeres de los sectores medios.

En este periodo surgió una vasta gama de organizaciones, entre otras, el Movimiento de Mujeres Pobladoras (MOMUPO), que representaba a sectores populares urbanos; el Comité de Defensa de los Derechos Humanos del Pueblo (CDEM); el de Mujeres de Chile (MUDECHI) y el Movimiento Feminista.¹⁷ El objetivo principal de estas organizaciones era la lucha contra la dictadura.

La diversidad de organizaciones femeninas y el carácter contestatario que compartían, dio origen, en 1983, a una organización que las agruparía, el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer (MEMCH), dicha organización tomó el nombre del movimiento sufragista que lideró la lucha por la conquista del voto entre 1935 y 1953.

El MEMCH-83 agrupaba originalmente a 24 organizaciones de mujeres;¹⁸ desarrollaba, promovía y coordinaba actividades conjuntas para repudiar al régimen (Valenzuela, 1993: 322). La difícil relación entre

¹⁷ El Movimiento Feminista agrupaba, aunque no de manera exclusiva, a mujeres de clase media cuyo objetivo era la búsqueda de nuevas relaciones de espacios políticos para este sector.

¹⁸ Entre las organizaciones que integraron el MEMCH-83, se encontraban el Movimiento Feminista, MOMUPO, MUDECHI, CODEM, el Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical, Mujeres Democráticas, Unión de Mujeres de Chile, Comisión de Derechos de la Mujer de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, etcétera.

los movimientos sociales y los partidos políticos, después de una década de proscripción política, llevó a estas organizaciones a replantearse la conveniencia de mantener su independencia, pues se recordaba, con temor, la cooptación de que había sido objeto una vez obtenido el derecho al voto en 1949. Esto llevó a que, en un primer momento, algunas mujeres mantuvieran una adhesión a su partido y al movimiento, de esta manera se producía una doble militancia. Sin embargo, la carencia de vías institucionales de representación y participación llevó a reorientar esta doble militancia en un intento por incorporar a las estructuras partidarias.

Así se crearon organizaciones como el Movimiento de Mujeres por el Socialismo, en 1984, que combinaba la acción política como militantes de diferentes partidos de izquierda, con la aproximación a la lucha de las mujeres. Más tarde surgió la Federación de Mujeres Socialistas (FMS), que intentaba incorporar de manera significativa la participación de la mujer en la estructura formal del Partido Socialista-Núñez (Molina, 1988: 31).

2.6 Situación de los empresarios

El problema económico que vivió el país y como ya lo hemos advertido provocó diversas protestas en la población. En el caso concreto de los empresarios la credibilidad de ellos¹⁹ hacia el modelo económico se vio seriamente afectada, pues comenzaron a originarse críticas severas hacia esta política del gobierno, especialmente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), así como de la Asociación de Industriales

¹⁹ A diferencia de la etapa previa ahora la crisis en el modelo económico había tocado a un grupo de la población que se consideraba el sector más exitoso con el modelo en curso.

Metalúrgicos (ASIMET). Sin embargo la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) no criticó al gobierno con respecto a esta crisis financiera.

Las organizaciones del pequeño y mediano empresario, en cambio, reaccionaron con mayor rudeza, pues este sector afirmaba que la crisis no era transitoria, sino que revelaba las insuficiencias estructurales del modelo económico. Estos empresarios comenzaron a reactivar las organizaciones que les habían dado fuerza en su lucha contra el gobierno de la Unidad Popular. De esta forma, en 1981, proponen la reconstrucción del *Multigremio*, organismo en el cual se agrupaban;²⁰ su objetivo era formar un órgano de movilización que les permitiera enfrentar activamente el problema económico y darles poder de presión frente al gobierno. Este multigremio incluía tanto a profesionales como a sindicatos.

Las medidas que tomó esta organización fueron muy significativas porque los empresarios comenzaron a tomar decisiones como la de suspender los pagos de sus deudas y sacar a remate sus propiedades, realizar paros de camioneros y comerciantes en ciudades de provincia e incluso preparar una inmovilización de actividades en todo el país (Campero, 1993: 262). La presión sobre el gobierno fue intensa, las movilizaciones de los pequeños y medianos empresarios tenían un punto en común: el gran endeudamiento de todos ellos con la banca estatal y privada, pero a partir de este aspecto demandarán que se reemplace el grupo civil que conduce la política económica.

La situación fue agravándose progresivamente durante los meses siguientes; en octubre de 1982 se iniciaron acciones con mayor presión

²⁰ Así como ocurrió en 1971 con el Comando Nacional de Acción Gremial.

de parte de los sectores empresariales y que eran críticos de la política del gobierno. El punto de partida de esta protesta fue la *Declaración de Valdivia*, realizada el 23 de octubre del mismo año, esta acción no es nada más que es el reflejo de una serie de tensiones que venían acumulándose desde 1981.²¹

A la citada declaración siguieron otras movilizaciones de los sectores empresariales, pues en varias ciudades de provincia los empresarios endeudados empezaron a impedir, físicamente, los remates de propiedades agrícolas y de industrias, de igual modo organizaron protestas públicas en las calles.

Por su parte, los grandes empresarios vinculados con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) se habían mantenido en silencio durante este proceso conflictivo, pues ellos estaban tratando de aplicar una estrategia de negociación con el régimen militar en las materias económicas más conflictivas y no estaban de acuerdo con la movilización directa que realizaban los pequeños empresarios.

Durante 1983, los pequeños empresarios continuaron sus acciones de protesta y movilizaciones; incluso, se propusieron organizar un paro de actividades, idea formulada tiempo atrás y que no se había llevado a cabo. El gobierno mantuvo "mano dura" ante estas actitudes, sin embargo, al mismo tiempo les ofreció soluciones parciales pero sólo a algunos sectores del gremio, principalmente en cuanto a sus problemas de endeudamiento (Campero, 1993: 266).

²¹ Esta declaración, si bien tiene su origen en los empresarios de la ciudad de Valdivia, ubicada al sur de Chile, fue de hecho una manifestación en todo el país.

Finalmente, la dura política del gobierno (recesión económica y política para algunos y ofertas de tipo coyuntural para otros), así como la presencia (y a menudo oposición) de las organizaciones de grandes empresarios diluyeron, poco a poco, las movilizaciones, pues los costos de enfrentar a ambas fuerzas comenzaron a ser muy altos para los gremios que las habían encabezado.

El surgimiento de movimientos de oposición contra el régimen militar, en mayo de 1983 (las protestas nacionales), fueron encabezados por los sindicatos de trabajadores del cobre y al que se sumaron muchos sectores sociales pusieron al gobierno en una situación muy difícil. Ante esta "amenaza" de desestabilización, que provenía de la oposición, los sectores empresariales tendieron a cerrar filas en torno al gobierno.

2.7 Oposición popular al régimen militar

En los primeros años de régimen militar no puede hablarse estrictamente de oposición, sino de *resistencia*²² por parte del sector derrotado por el golpe, ellos fueron los partidos y sectores sociales que apoyaban al gobierno de la Unidad Popular. Éstos buscaban asegurar la sobrevivencia de sus militantes y dirigentes, de los cuales muchos fueron asesinados, presos, exiliados, etcétera, y de ser posible mantener sus aparatos organizacionales.

Por otro lado, se creó un espacio *semi opositor* por medio de la Iglesia católica. La función oficial de ésta fue la defensa de los perseguidos por la represión y la acumulación y difusión de información

²² Para efectos de este trabajo, entenderemos *resistencia* partiendo de la forma en que lo describe Garretón, es decir, el nivel de subsistencia individual y organizacional de quienes se oponen al régimen militar. Por disidencia, aquella lucha opositora que no busca transformar o eliminar el régimen, sino expresa su rechazo a él. Por *oposición* propiamente, a los actores y luchas que buscan transformar o cambiar el régimen.

al respecto. Además también era el espacio de encuentro donde se daban cita quienes habían logrado subsistir al embate del régimen. A las iglesias asistían los actores políticos y sociales para discutir y planear su reconstrucción.

En este período la Iglesia aparecía como el único actor frente al poder estatal-militar. Mas por su propia naturaleza este actor no podía asumir cabalmente el papel de *oposición*. En estos momentos se da un cambio dentro del partido político Democracia Cristiana, con respecto a la actitud que se tenía con el régimen, ahora ésta será de crítica, lo que puede calificarse de un proceso típico de *disidencia*. También hubo un intento de lucha armada en contra del régimen por parte del MIR.²³ Este intento adquirió la forma de resistencia armada, pero además de que fue duramente reprimida no logró tener un amplio apoyo dentro de los mismos opositores, ni afectó la estabilidad del régimen.

Pinochet idea la forma de perpetuarse en el poder legitimando su estancia con la Constitución de 1980, en la que se plantea el plebiscito para 1988. Ante esta propuesta del gobierno militar la oposición aprovecha el espacio político que se presentaba para exigir garantías políticas y reformas a dicha Constitución, para lo cual ella impulsaría otro plebiscito a la Constitución, éste se llevaría a cabo en 1980.

Las reformas a la Constitución, fomentadas por el plebiscito, fueron trascendentes en el proceso de institucionalización de éste (CESOC, 1984:121). En ella se estipulaba la prolongación del régimen militar hasta 1989 y la transformación del mismo en uno de tipo autoritario, aunque

²³ El MIR tenía su definición de tipo insurreccional, desde la década de los años sesenta. Muchos de sus principales dirigentes y cuadros intermedios, así como militantes, fueron asesinados, detenidos, expulsados del país, etcétera. Su resistencia de tipo armada no fue nunca realmente significativa y es con la aparición del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (vinculado inicialmente al partido Comunista), que la tesis de la lucha armada comienza a tener una mayor significación.

de carácter civil; el espacio político sería restringido y sobre todo continuaría bajo el poder tutelar de las fuerzas armadas. Este paso de una dictadura militar a un régimen autoritario, de carácter permanente, se intentaba hacer coincidir en 1988, con la permanencia de Pinochet mediante el plebiscito. Por medio de éste los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas propondrían un candidato para un periodo presidencial de ocho años, a partir del cual empezaría a regir una Constitución definitiva. Sería hasta 1989 que se mantendría, básicamente, el esquema de poder instalado con el golpe militar: Pinochet como el Jefe de Estado y de la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, lo que constituyó el Poder Legislativo (Garretón, 1993: 402).

En el plebiscito convocado por Pinochet, para ratificar la Constitución; la Democracia Cristiana asumió el liderazgo público de la oposición, en ese momento no existía una estrategia coherente y concertada de los partidos de izquierda respecto a cómo enfrentar el plebiscito. Éste se lleva a cabo, se maquina el fraude que hace que los resultados favorezcan al gobierno. El triunfo bajo estas circunstancias es denunciado por la oposición y origina que la Iglesia deslegitime el tanto el plebiscito, como la duración indefinida del régimen, todo esto provocó varias consecuencias:

Entre 1981 y 1982 el régimen militar entra en una etapa de crisis debido, principalmente, a las fallas en el modelo económico, expresado en la quiebra del sistema financiero, en el cambio del equipo encargado de la conducción económica, en una fuerte deuda externa y en un generalizado endeudamiento de vastos sectores de las capas medias (Varas, 1993: 160).

La expresión socio-política más importante de esta crisis, y que muchos sectores opositores confundieron con crisis terminal, fue el desencadenamiento de las protestas, a partir del mes de mayo de 1983. Lo que significó un renacimiento del movimiento de masas, esto obligó al régimen a dar indicios de apertura.²⁴

Por su parte, el régimen logró recomponer su esquema económico y enfocó todos sus esfuerzos a cumplir el itinerario previsto en la Constitución. El periodo que va desde el inicio de las protestas (mayo de 1983), hasta el momento en que se produce un acuerdo mayoritario de la oposición para enfrentar al régimen en el plebiscito de 1988, rechazando al candidato propuesto por las F.F.A.A. (febrero de 1988), fue la culminación de lo que Manuel Antonio Garretón ha denominado *proceso de aprendizaje* de la oposición (Garretón, 1993: 405).

El ciclo de movilizaciones, que se inició en 1983, estuvo directamente relacionado con la crisis generalizada por la cual atravesaba el país: aplicación de un modelo económico que afectó a los sectores medios y populares; violaciones a los derechos humanos, ésta fue una de las primeras demandas reivindicativas de la oposición y la división interna en las Fuerzas Armadas. además cabe mencionar que en esta crisis desempeñaron un papel importante ciertos núcleos sindicales, los cuales habían ya había logrado recuperar un buen nivel de organización; la sobrevivencia de los partidos políticos y su actividad subterránea.²⁵

El proceso de movilizaciones duró tres años (de la Maza y Garcés, 1989: 127), en él se dieron actividades como la semiparalización del país,

²⁴ Tal "apertura" tenía por fin el restablecer el apoyo a sectores civiles que se distanciaban en y encapsular a la oposición en la institucionalidad impuesta por la Constitución de 1980.

²⁵ Todo esto hizo posible que la crisis del régimen encontrara no sólo una vasto descontento por parte de la población, sino también organizaciones que pudieron canalizarlo y darle formas de expresión colectiva.

grandes concentraciones, manifestaciones callejeras de diversos sectores, especialmente estudiantiles.²⁶ Las expresiones populares de protesta incluían levantamiento de barricadas y enfrentamientos con la policía que, reforzada por los militares, las reprimía de forma violenta.

Lo sorpresivo y numeroso de las primeras protestas, dio pie a que la oposición percibiera tres aspectos, además de que por primera vez estaban en un espacio público: primero, la visión de la inminente caída del régimen, si se continuaban las presiones y protestas; dos, la idea de que era necesaria la unidad de las organizaciones políticas para hacerse cargo de la situación cuando el régimen se derrumbe y tres, la visión de que la tradicional articulación, entre política y movimiento social se mantenía, relativamente, sin daño (Garretón, 1993: 407).

Es importante señalar que en este momento se puede identificar claramente el proceso de *liberalización* dentro de la transición democrática chilena, ya que algunos actores, opositores al régimen, comienzan a generar movimientos de liberalización, pues se han decidido a ejercer públicamente sus derechos de manifestación, asociación y libertad de expresión. Una vez que estos actores se atreven a externar su oposición y no son castigados de una manera tan severa, como durante el apogeo del régimen autoritario, aumenta cada vez más la posibilidad de que otros se atrevan a hacer lo mismo.

2.8 Partidos políticos ante la apertura y reconstrucción partidaria

En 1983 el modelo político-militar sufre un duro golpe en su modelo económico, el cual le había servido de base material, por lo tanto tiene

²⁶ A ello debe agregarse los triunfos electorales opositores en todas las organizaciones sociales, lo que dejaba aislados a los partidarios del régimen.

que echar a andar otro proyecto para la sobrevivencia del régimen militar, bajo los términos establecidos en la Constitución de 1980. Este impacto se manifestó, como ya lo hemos visto anteriormente, en el movimiento masivo de las denominadas *protestas nacionales*, lo que forzó al gobierno a crear un espacio político-público informal, donde irrumpió la oposición política por medio de grandes bloques de partidos.

La incapacidad del régimen de "encapsular" a la oposición mediante lo que se denominó "apertura" y fracasada la utopía militar de eliminar la política en su contra, el gobierno actuó frente a esta situación combinando acciones mínimas de libertad con medidas drásticamente represivas. De esta forma y mediante el uso de la Constitución de 1980 busca fundar un sistema político -restringido y excluyente- que le ayude a mantenerse en el poder, así como de su complemento institucional las llamadas "leyes políticas", que comprenden la ley de partidos.

En estos momentos de apertura política persiste la crisis del sistema de partidos políticos en Chile, lo que los obliga a hacer cambios de relativa profundidad. Varias encuestas presentaron, como resultado, que la mayor parte de la población cree que no se puede dar paso a la democracia sin la participación de los partidos políticos, pues la función de éstos era la agregación de intereses y la competencia por la representación y el poder políticos. Por otra parte, hay estudios que demuestran una muy fuerte crítica a los partidos políticos, acompañada de una escasa valoración de su actuación bajo el régimen militar (Baño, 1991. 70).²⁷

²⁷ No se trata sólo de la crítica genérica que se expresa en casi todos los contextos a distancia de los partidos respecto de la sociedad, sino que de una crítica del sistema partidario chileno, en términos de su fragmentación, de su instrumentación de las organizaciones sociales, su incapacidad para enfrentar coherente y unitariamente al régimen militar.

De esta forma, la continuidad y legitimidad del sistema partidario chileno va acompañada de una doble crisis: una, la que experimentan todos los sistemas de partido en las sociedades contemporáneas, proveniente del hecho de que con el aumento de la complejidad y la masificación política, los partidos han dejado de ser los únicos mecanismos de expresión del debate y otra, la opinión pública y de representación de intereses.

Esta serie de dificultades obligan y hacen necesaria la reconstrucción de los partidos, ello es una tarea a largo plazo en esta etapa de transición. Manuel Antonio Garretón señala al respecto que "esta reconstrucción del sistema partidario existe de algún modo y que el problema principal es la falta de un espacio público en que ella se exprese y de un sistema político donde su acción sea efectiva" (Garretón, 1987: 221). Es decir, para que una reconstrucción del sistema partidario sea real, debe cumplir con el requisito de ser completa, sin ausencia o exclusión de ningún sector ideológico político y además garantizar los espacios necesarios para la expresión de ellos.

Aunque cabe advertir que la sola reconstrucción de un sistema partidario, cualquiera que sea su grado de desarrollo, y su presencia en el espacio público no bastan para desencadenar y asegurar un proceso de transición democrática.²⁸

Es importante señalar que en este momento la oposición, en su conjunto, irrumpió en el espacio público de apertura sin una propuesta concreta de transición, con la que pudiera negociar frente al régimen militar ya debilitado; era claro que carecía de metas específicas.

²⁸ La experiencia de la "apertura política", entre 1983 y 1984, muestra hasta qué punto la existencia de partidos y agrupaciones más amplias fue incapaz de provocar una seria crisis de desestabilización del régimen militar chileno.

La reconstrucción de partidos también tiene que ver con un proyecto unitario que albergue, de ser posible, los intereses de la mayor parte de los partidos políticos y de la población en su conjunto. Este proyecto, a su vez, debe ser negociable y generador de un espacio en donde se de solución al conflicto de legitimidad entre el régimen y la oposición, ya que este espacio o institución medidora, ha sido un elemento clave de todas las transiciones ocurridas en los últimos tiempos (O'Donnell, 1993: 289).

Para que se de una reconstrucción en el sistema de partidos tiene que existir, necesariamente, el restablecimiento de lazos entre el sistema partidario y los diversos sectores sociales que éstos puedan representar.²⁹

De esta forma comienzan a conformarse, en 1983, los primeros bloques de unidad ideológico-políticos de la oposición. El primero de ellos se realiza entre agosto y diciembre, en él se da la pauta de los siguientes, también en éste se conformaron la Alianza Democrática (grupos pequeños de derecha, partidos de centro como el Democracia Cristiana, otros de centro aunque de menor importancia y algunos partidos y grupos socialistas), Movimiento Democrático Popular (formado principalmente por partidos de izquierda, grupos socialistas, por el Partido Comunista y el MIR), y Bloque Socialista (con matiz diferente a los anteriores, pues intentaba más la unificación del campo socialista, en él se agrupan sectores socialistas que estaban en la Alianza Democrática, además de la Izquierda Cristiana y el MAPU). Todos estos bloques coincidieron con la plataforma abstracta de "Salida de Pinochet, Gobierno Provisional y Asamblea Constituyente" (Garretón, 1989: 419). Sin

²⁹ Superando, de esta forma, la situación de una sociedad atomizada, donde no se sabe a ciencia cierta quién representa a quién.

embargo, tras esta lucha en común se escondían percepciones diferentes sobre el carácter de una transición, lo cual se evidenciaba en la dificultad de establecer una vía común.

Los intentos parciales de unificación, tales como la Intransigencia Democrática (agrupación de personalidades) o el Frente Cívico (inspirado por el Partido Socialista que estaba en la Alianza Democrática) no superaron su marginalidad y se apagaron rápidamente.

Al cabo de algunos años, que sin duda habían servido para dar un espacio de presencia a la clase política por medio de estos bloques, la Alianza Democrática perdió su componente de izquierda, el Bloque Socialista se disolvió ante la persistencia de tendencias encontradas que buscaban, antes que nada, asegurar la identidad partidaria de ciertos grupos, y el Movimiento Democrático Popular cedió paso, en junio de 1987, a la Izquierda Unida, donde se integraron el MAPU y la Izquierda Cristiana. Pero este último esfuerzo, que rememoraba el viejo objetivo de la *unidad de la izquierda* y que intentaba acabar con el aislamiento del Partido Comunista, se enfrentó al hecho de que, en esos momentos, los partidos que lo constituían discrepaban de la forma en que se enfrentarían a la institucionalidad del régimen, principalmente cuando se llevara a cabo el plebiscito.

Durante 1985 se produce otro intento de reagrupación opositora, esta vez por una iniciativa de la Iglesia católica, en lo que se llamó el Acuerdo Nacional para una Transición a la Democracia Plena.³⁰ La importancia de éste (el cual incorporaba tanto a importantes partidos de derecha, que apoyaban al régimen, como y a la oposición, pero

³⁰ Esto ocurrió en agosto y bajo los auspicios del Cardenal Fresno.

con la exclusión de los comunistas) fue la amplia gama de partidos que aglutinaba y ciertos mecanismos de transición: el plebiscito para reformar la Constitución, el intento de perfeccionar y profundizar el Acuerdo Nacional, lo cual llevó a los sectores más proclives al régimen a reagruparse y a marginarse del Acuerdo, aunque éste se haya ampliado a nuevos grupos de izquierda.³¹

³¹ En 1986, se retiraron del Acuerdo Nacional, Unión Nacional, perteneciente a la derecha, y la Izquierda Cristiana, al mismo tiempo se incorporaron algunos grupos socialistas y el MAPU.

Capítulo 3

ACTORES QUE INTERVIENEN EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA CHILENA

Este último capítulo de la investigación tiene por objeto el análisis del comportamiento de los distintos actores que intervienen durante la transición democrática chilena.

Dos acontecimientos marcan el desarrollo participativo de los actores: el plebiscito de 1988 y las elecciones parlamentarias de 1990. Algunas de las tareas desempeñadas por los actores en estos acontecimientos son las siguientes: En el sector empresarial, por ejemplo, continúa la división interna, generada por los problemas económicos de 1982, con una diferenciación, pues los grandes empresarios retoman su papel de actores de forma muy significativa, impulsando una lucha política en su discurso y dando amplio apoyo al gobierno militar. Las políticas internacionales y los factores externos, por su parte, apoyan de manera constante el procesos prebliscitario y de elecciones, su participación se expresa en la presión que ésta ejerce para legitimar los procesos, lo que ayudó a que la dinámica de institucionalización diera por resultado un proceso que permitió la expresión ciudadana. Los movimientos de mujeres, a su vez, desempeñaron la tarea de politizar a este sector de la sociedad chilena. El sindicalismo, no deja de perder importancia pues se desempeña como un actor guía, ya que contribuye a la acción social y política de sus bases; esto se observará claramente cuando del desempeño contestatario general pasa a la convocación de las protestas nacionales. La oposición popular al régimen, con sus fallas y aciertos, colabora con sus acciones en todo el país a la apertura democrática y con su apoyo a los partidos políticos al triunfo de la oposición en el plebiscito y en las elecciones parlamentarias. Los partidos políticos tienen una significativa participación, por lo que la forma en

que se explica su actividad es amplia, ésta comienza en el momento de su inserción institucional, pues ello significó un proceso de repolitización de la sociedad para lograr un resultado favorable en los procesos electorales, los partidos políticos se dan a la tarea de hacer coaliciones partidarias y relacionarse con la sociedad, aunque este acercamiento con la sociedad se da en un principio con ciertas desconfianzas por parte de esta última, aunque finalmente ambos implementan el objetivo de luchar contra el régimen y derrotarlo por la vía electoral.

Todas las tareas desarrolladas por los actores, en ocasiones las desarrolla la oposición de manera conjunta ara dar el paso más significativo de la transición democrática chilena: el triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias realizadas en 1992.

3.1 Empresarios

Las organizaciones del gran empresariado, como lo señalaba el capítulo anterior, estuvieron de acuerdo en definir a la situación económica (recesión) de 1981, como transitoria. Sin embargo, a medida que esta crisis se iba profundizando, surgieron críticas a esa posición dentro de sus propios gremios. Como consecuencia de ello y de la movilización de los pequeños y medianos empresarios, los grandes empresarios van a evolucionar en el sentido de tener que admitir que se trataba de problemas económicos con mayor profundidad y que, por tanto, había que enfrentarla con criterios acordes a ese nuevo diagnóstico. Este proceso fue largo y complejo, puesto que se tenía el temor de que una afirmación de ese tipo perjudicaría la estabilidad política del régimen militar.

El sector de los grandes empresarios, por medio de su política denominada "reactivación negociada" con el gobierno, logró, entre 1983 y 1985, adquirir una influencia relativamente importante en la política económica gubernamental.¹

Uno de los aspectos más conflictivos fue la política de aranceles. Si bien el gobierno había consentido en subirlos del 20 al 35%, la mayor parte del sector empresarial era partidaria de aranceles diferenciados entre 0 y 35% y no de aranceles fijos. La propuesta empresarial intentaba hacer compatible los intereses de los distintos sectores, pues algunos se beneficiaban con aranceles bajos y otros con aranceles más altos. La polémica sobre este punto fue constante y llegó a producir disensiones en el seno del propio gobierno (Campero, 1993: 280).

El grado de conflictividad, que en ciertos momentos adquirió el proceso de negociación, se fue incrementado debido a que entre los mismos empresarios no siempre existía acuerdo. La defensa de intereses sectoriales y corporativos dificultaba, en muchas ocasiones, el llegar a consensos con el gobierno y entorpecía la dirección unificada que dirigentes como Manuel Feliú, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), intentaban darle al empresariado. Hacia fines de 1984, el general Pinochet se vio obligado a hacer un llamado a los empresarios para que llegaran a un "consenso mínimo" y pidió que sus proposiciones fueran más pragmáticas.

Como ya hemos visto, los dirigentes de este gremio habían iniciado una campaña que hiciera de ellos un sector importante en la actividad social y política del país. Su propósito era superar la imagen de un tipo

¹ El proceso de "renovación negociada" fue bastante complejo y precisamente por su política de equilibrarse entre las distintas tendencias, el gobierno va a dar continuamente marchas y contramarchas en las decisiones para enfrentar la situación económica.

de personas interesadas exclusivamente en sus fines económicos y que además estaban divididas, permanentemente, por sus discrepancias corporativas. Ahora se trataba de crear una nueva imagen: el empresario como motor del desarrollo económico y social, además un activo promotor de la armonía social. Los dirigentes empresariales pensaban que esa era la mejor forma de apoyar la continuidad del modelo social y económico impuesto por el régimen militar.

Manuel Feliú escribe, en las primeras páginas de su libro lo siguiente: "nada sacaremos luchando duramente para subir el PIB si no logramos, al mismo tiempo, que los principios de la libre empresa sean compartidos por la población, pues el desarrollo así obtenido será débil y efímero [...] no basta con ser los motores del desarrollo, es también necesario ganar la batalla de las ideas" (Feliú: 1988: 3).

A partir de 1986 la política empresarial dio una importante lucha en la "batalla de ideas". Los elementos que compusieron este discurso empresarial fueron los siguientes:

a) Difusión de una idea optimista, respecto del desarrollo económico del país. El modelo económico aplicado en Chile probaba ser el único capaz de sacar al país del subdesarrollo.

b) El empresario y la empresa privada como motor de ese modelo y, por lo tanto, del desarrollo y la modernidad.

c) La libertad económica, concepto básico del modelo, como la base de la libertad política.

d) El empresario y la empresa privada como actores y lugares principales para la producción de riqueza y su distribución, única fuente de armonía social.

e) La libertad de emprender como la fuente de la modernidad y el progreso. El Estado como creador y preservador de condiciones favorables para esa libertad y como protector de los sectores económicos y sociales más débiles que no poseen condiciones de igualdad para competir.

f) La búsqueda de ganancia y riqueza como propósito socialmente legítimo, que permite desarrollar e incentivar el espíritu emprendedor, necesario para conseguir la modernidad y el progreso.

g) El empresario como un actor interesado en la democracia, pues la empresa se desarrolla mejor en ese sistema, siempre que éste sea moderno y asegure la libertad de emprender (Campero, 1993: 280-81).

Durante 1986, la CPC trajo a Chile al empresario español Alfredo de Molinas, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), a quien se le dio una amplia publicidad por ser un difusor calificado de los mismos planteamientos ideológicos que proclamaban los empresarios chilenos. De Molinas se convirtió en una especie de "padre intelectual" de dirigentes como Feliú y otros, sostuvo numerosas sesiones de adoctrinamiento con dirigentes empresariales del país. Sus conferencias públicas fueron ampliamente difundidas por la prensa.²

Por lo anterior, todo sector vinculado a la CPC tuvo sin duda el liderazgo de la acción de los empresarios en la campaña. De hecho se convirtió en uno de los soportes civiles más fuertes del gobierno.

² En agosto de ese mismo año, se realizó el *Primer encuentro empresarial del norte*, que reunió a una gran cantidad de empresarios de esa región de Chile, este congreso estuvo concentrado en temas ideológicos y corporativos. En ese mismo mes, la CPC reunió a los dirigentes de todas sus ramas afiliadas en Viña del Mar para elaborar una propuesta de trabajo a largo plazo, nuevamente, con la estrategia de difusión ideológica y política. También en ese mes se realizó el *Congreso de nuevos empresarios*, actividad que fue dirigida especialmente hacia la juventud con el propósito de promover en ella un espíritu de empresa.

Pese a esto, subsistieron sectores críticos al gobierno que no se plegaron a la estrategia de la CPC. El grupo principal lo constituían algunos empresarios metalúrgicos, camioneros y pequeños comerciantes. Ellos sostenían que la reactivación no beneficiaba a los sectores que representaban y que la política social del gobierno era insuficiente. Asimismo, insistían en que se debía acelerar el regreso a la democracia política (Campero, 1993: 286). Algunos sectores de los camioneros y comerciantes siguieron participando en la Asamblea de la Civilidad, y posteriormente en la organización denominada Acuerdo Social Amplio (ACUSO), que fue la continuación de la primera.³

En agosto de 1988, otro pequeño núcleo de empresarios se agrupó en la organización Empresarios por la Democracia. Ellos representaban básicamente a: 1) pequeños empresarios, muchos de los cuales eran profesionistas y partidarios de la Unidad Popular, que después del golpe militar organizaron empresas como medio de subsistencia y 2) profesionales técnicos que durante el periodo militar se desempeñaban como ejecutivos de empresas y eran miembros de partidos de la oposición.⁴

Por último, la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC) que agrupaba a empresarios y ejecutivos católicos vinculados a la Iglesia, fue también un sector que se mantuvo neutral frente al plebiscito y no se sumó a la política de la CPC.⁵

³ Sin embargo, su efecto sobre la campaña fue reducido respecto del sector empresarial, entre otras cosas, porque no pudieron pronunciarse públicamente a favor de la oposición, sino que debieron mantener una posición de neutralidad. Ello se debió a que, si bien sus bases eran críticas a la política gubernamental, no estaban claramente dispuestas a ser percibidas como opositoras.

⁴ Esta organización logró una visibilidad política de cierta importancia como sector opositor, aunque su paso en el mundo empresarial era en realidad muy reducido.

⁵ Sin embargo, igualmente se trataba de un núcleo pequeño y con influencia limitada entre los empresarios. En consecuencia, el liderazgo empresarial de la CPC no fue realmente cuestionado.

La campaña ideológica de los empresarios a favor del régimen fue desarrollada por la CPC durante 1987 y parte de 1988, hasta la constitución de Empresarios para el Desarrollo, en junio de 1988. Su línea de campaña ideológica destacó la dimensión de progreso y modernidad que, según ellos, había alcanzado el país bajo el régimen militar (Campero, 1993. 287).

La CPC organizó encuentros con universitarios y jóvenes empresarios, convocó a concursos para crear nuevas empresas, y propuso un Plan Empresarial de Contratación de Aprendices. En fin, desarrolló una actividad intensa de divulgación de sus ideas y demostración de su interés social.

Este conjunto de acciones de la CPC proporcionó la base para la creación de Empresarios para el Desarrollo, entidad que, a partir de junio de 1988, tomó la conducción de difusión ideológica del sector. Esta organización convocó a los empresarios a firmar un documento denominado Compromisos por la Libertad.⁶

Hasta muy cerca del Plebiscito, tanto Empresarios para el Desarrollo como los Comités Cívicos mantuvieron la línea de destacar el progreso y el futuro como elemento central de su discurso. Sin embargo en los últimos meses, y ante los resultados de la encuesta que mostraban ganadora a la oposición, esta línea varió y comenzaron a hacer uso de la *campaña de terror*, ésta se basó en alertar a la población sobre los peligros que sobrevendrían si perdiera el gobierno, es decir la opción **SI**. Ello demostró que el temor era un factor todavía muy fuerte entre los

⁶ Este documento se difundió como la declaración de principios ideológicos del empresariado. Sus principales puntos fueron los siguientes: libertad de emprender; Estado subsidiario y de derecho; libertad de mercado y libre competencia; libertad de comercio exterior; solidaridad y bien común.

empresarios y que su discurso ideológico futurista y modernizador, cedía posiciones frente a los viejos fantasmas.⁷

El 5 de octubre de 1988 la oposición venció en el plebiscito. Las predicciones catastróficas de que se produciría un caos en la economía, no se cumplieron. Sólo hubo algunos signos de incertidumbre en los primeros días, ello se reflejó en el la caída del Índice General de Acciones el 6 de octubre, en un 11%, de igual manera pasó con el Índice Selectivo de Acciones, que cayó 16.6%. Posteriormente, los índices económicos mostraron normalidad (Campero, 1993: 291).

Los dirigentes empresariales reaccionaron llamando a la calma y a la unidad de los chilenos. Pidieron que se desterraran los ánimos de revancha que podrían seguir y manifestaron que reconocían el resultado en las urnas.

En este marco tres tendencias comenzaron a desarrollarse entre los sectores empresariales. La primera de ellas se expresó en un cierto repliegue corporativo de tipo individualista, que correspondió a una parte de la base empresarial, la que comenzó a moverse en dirección de sus intereses particulares, ante un eventual cuadro adverso en los político. Estos sectores postergaron sus decisiones de inversión o iniciaron prospecciones dirigidas a buscar posibles oportunidades en otros países. En cuanto a su participación política, se desengancharon de toda actividad pública y se refugiaron en el silencio. Algunos de ellos depedieron a dirigentes sindicales opositores, con el fin de limpiar a tiempo sus empresas de posibles agentes de conflicto.

⁷ Los empresarios llegaron al 5 de octubre tensionados entre su ideología optimista y su temor a las fuerzas sociales que representaba la oposición. El nuevo actor empresarial pensaba que había ganado fuerza y poseía un discurso agresivo, pero no se sentía seguro.

La segunda se manifestó en el resurgimiento de los sectores críticos al gobierno, lo cuales habían sido casi completamente amagados por el liderazgo de la CPC en los tres años anteriores. Este sector empresarial comenzó a tomar iniciativas en el sentido de replantear sus principios y mejorar su organización. En los últimos meses de 1988 y los primeros de 1989 mostraron una reactivación de estos sectores. Se distinguió la organización de la Asociación de Exportadores de Manufacturas no Tradicionales (ASEXMA), presidida por Gustavo Ramdohr, dicha organización tomó un cierto liderazgo en cuanto a propuestas de defensa de la industria nacional, con un sentido moderno y a la vez de interés en los problemas de la equidad social y económica.

La tercera y más importante tendencia corresponde a lo que se podría denominar la reactivación de la batalla de las ideas, que buscó persistir en la construcción de un actor empresarial fuerte, que superase el revés del plebiscito y que se preparara para desempeñar un papel decisivo en defensa de la ideología y los intereses empresariales en las elecciones de fines de 1989. Esta tendencia demostró capacidad para reactivarse rápidamente bajo la conducción de Manuel Fellú, después de octubre de 1988. Este poderoso sector empresarial se dispuso a desempeñar un papel activo en la campaña presidencial y parlamentaria (Campero: 1993: 293-94).

La CPC decidió, después del plebiscito, fortalecer la organización de Empresarios por el Desarrollo, que como lo señalamos anteriormente, fue el principal órgano difusor de sus ideas. Este organismo comenzó, a fines de octubre del mismo año, a divulgar manifiestos en la prensa con el lema: Una sociedad libre, la gran empresa de todos los chilenos.

En noviembre de 1988, el CPC convocó a las centrales sindicales CUT y CDT a un diálogo con empresarios para plantear la Concertación Social. Sólo asistió la CDT, pero el evento permitió a los dirigentes empresariales dar una demostración de que estaban activamente interesados en dialogar con los trabajadores.⁸

Pese a la derrota en el plebiscito, los dirigentes empresariales se sintieron en condiciones históricas superiores por ser un actor central en el proceso social y político. Su desafío era conseguir que sus bases empresariales se sumaran a una batalla cultural, más que a una batalla económica. Esta fue la lógica de su accionar durante los últimos años, la cual chocó contra el corporativismo y el particularismo de un empresariado que miraba sobre todo a corto plazo sus intereses inmediatos. Esta actitud persistió durante la transición y tuvo mucha fuerza entre la dirigencia empresarial.

3.2 Mujeres en la Transición Democrática

Las diferencias en torno a cómo enfrentar el problema de la mujer, expresaba intereses contrapuestos de los sectores de la derecha. Las posturas tradicionales, lideradas por Lucía Hiriart de Pinochet y su "ejército de voluntarias", reivindicaban los derechos de la mujer sólo dentro de la familia. Por otra parte, los sectores modernos liberales, representados principalmente por mujeres de sectores medios y profesionistas, se preocupaban, además, por la discriminación que sufre la mujer fuera de su hogar.

⁸ Todos los meses posteriores a plebiscito, las organizaciones empresariales estuvieron presentes en la prensa, desarrollando sistemáticamente un discurso que exigía a los partidos de oposición definirse frente a la empresa privada en el futuro. Igualmente manifestaron su preocupación por el nivel de los salarios, del empleo y la armonía en las relaciones laborales.

Para el plebiscito el gobierno dedicó buena parte de su campaña en el sector femenino, pues estaba consciente de su peso en los registros electorales, ya que casi un 52% de los votantes fueron mujeres, y considerando que aproximadamente un 30% del electorado estaba constituido por amas de casa, sector que se suponía apoyaba las opciones más conservadoras. El gobierno mantuvo así un discurso tradicional hacia la mujer, más tarde fue criticado por algunas de sus partidarias.

En una encuesta realizada dos meses antes del plebiscito, las mujeres mostraban preferencias radicalmente diferentes, según la actividad que desempeñaban. La diferencia en los niveles educacionales, la ocupación y posición social influyeron en ellas de manera diferente. Las amas de casa, que vivían en una situación de mayor aislamiento, además de que tenían comportamientos y expectativas diferentes a las mujeres que eran parte de la fuerza de trabajo (ver siguiente cuadro), pues la intención del voto de éstas era similar a la de la población masculina.

Intención del voto en mujeres, julio de 1988

	Labores del hogar	Trabajan	Estudiantes	Jubiladas
SI	45.3%	32.8%	27.7%	48.4%
NO	32.1%	46.0%	59.0%	31.7%
No sabe, no responde, indecisa	22.6%	21.2%	13.3%	19.9%
TOTAL	100%	100%	100%	100%

FUENTE: Encuesta Nacional CERC.

La derrota del régimen militar en el plebiscito, además de la necesidad de adecuarse a una nueva etapa política, llevó a los

sectores de mujeres de la derecha, que habían estado promoviendo nuevas formas de participación, a la formación de organizaciones como, por ejemplo, el Instituto para el Desarrollo del Liderazgo Político de la Mujer (IDLPM).⁹

El IDLPM criticó la aproximación gubernamental en torno al tema de la mujer, y especialmente la organización oficial dedicada a ella: La Secretaría Nacional de la Mujer, que tenía entre sus objetivos el de "destacar la importancia de la mujer y cooperar en la orientación para su mejor desarrollo como madre, cónyuge y ama de casa" (Valenzuela, 1993: 336-37). Por otro lado, diez meses antes de llevarse a cabo el plebiscito, Lucía Hiriart de Pinochet hizo un llamado a formar un gran Movimiento Femenino con el objeto de "apoyar las decisiones masculinas e ingresar paulatinamente a la vida política del país" (Valenzuela, 1993: 337). Con el retorno de la competencia electoral, las mujeres de derecha se unieron a diversos partidos, llegaron a formar aproximadamente el 50% de la militancia de los principales partidos de derecha. A pesar de esto ninguna mujer obtuvo ninguna de las senadurías y diputaciones que fueron elegidos por la derecha (Valenzuela, 1993: 336-37).

La crisis generalizada del sistema militar en Chile le dio a la mujer la posibilidad de ingresar al mundo político, en un proceso de creciente organización y participación. Esto originó que los partidos políticos, con el objetivo de avanzar juntos hacia la reconstrucción de la democracia en el país, intentaron atraer hacia sus fuerzas políticas las inquietudes de este sector, reconociendo la capacidad de organización de las mujeres.

⁹ Su objetivo era la "creación de la conciencia en la mujer", su promoción, apoyo a la organización y a la participación que cada una de ellas quisiera tener en las instancias, instituciones o partidos políticos.

3.3 Factores externos durante la transición democrática

Las condiciones políticas en las que se desarrolló el proceso plebiscitario fueron un elemento clave para el desenlace del mismo. En esta coyuntura resultó ser de suma importancia el hecho que los partidos políticos opositores se unieran a la Concertación de Partidos por el **NO** y al aceptar implícitamente el marco institucional -por lo menos durante el plebiscito- se dieron dichas condiciones.

El establecimiento de las normas y prácticas de este proceso no estuvo exento de debates dentro del régimen. En este sentido, la presión internacional y la necesidad de legitimar externamente el proceso ayudaron a que la dinámica de institucionalización diera por resultado un procedimiento que permitió la expresión ciudadana:¹⁰

Primero, la decisión del Tribunal Constitucional, el 14 de septiembre de 1985, de establecer el funcionamiento del Tribunal Calificador de Elecciones para el plebiscito de 1988 y no sólo desde las primeras elecciones del Congreso en 1990.

Segundo, el Tribunal Calificador suspende una serie de normas declaradas Inconstitucionales en la Ley de Partidos Políticos, lo cual hizo posible que en febrero de 1987 la oposición se organizara dentro de este marco.

Tercero, el hecho de que el Proyecto de Ley sobre Votaciones y Escrutinios, aprobado por la junta militar, no establecía un plazo entre la convocatoria al plebiscito y la realización de éste, sino entre la elección

¹⁰ Se trató de una serie de decisiones internas que originaron controversias al interior de los organismos del sistema, y que fueron tomadas en un clima en el que la legitimidad, incluso la internacional, desempeñó un papel muy importante, con estas decisiones se contribuía a generar espacios políticos y sobre todo se frenaba el desarrollo de las fuerzas más duras en el seno del régimen.

del candidato por los Comandantes en Jefe y el plebiscito; además se dejaba en manos del presidente la posibilidad de acortar la campaña, mediante el amparo de no dar a conocer la propuesta de los comandantes. Esto fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, en enero de 1988, y como resultado se estableció un plazo mínimo de 30 días entre la publicación de la propuesta y la fecha del llamado al plebiscito.

Cuarto, circulación de rumores sobre la pronta fijación de la fecha del plebiscito, hecho que habría limitado la participación de los votantes. Las declaraciones de miembros de la junta militar tendieron a despejar el temor sobre un registro electoral con bajo número de partidos políticos inscritos, lo cual favorecían al gobierno, dado que los opositores habían comenzado a registrarse tardíamente.

Quinto, relacionado con la libertad de expresión como requisito necesario de un proceso plebiscitario aceptado. Desde comienzos de 1988 se habían abierto espacios, aunque limitados, de debate en el controlado sistema de televisión.¹¹

En este largo proceso que generó las reglas de juego, la presión internacional ayudó a aquellos que efectivamente estaban por una apertura dentro del régimen, y les cerró espacios a quienes intentaban manipular el evento.

Los gobiernos y los actores externos (ver cap. 2, 2.3) siguieron muy de cerca el desarrollo de este proceso plebiscitario hasta el último momento. Hubo acciones destinadas a prevenir cualquier alteración del mismo (Portales, 1993: 487). No obstante lo anterior la política

¹¹ Sólo a principios de agosto de 1988, se dictó la ley que estableció una franja televisiva gratuita de quince minutos para cada opción durante la campaña, elemento que ha sido considerado clave en el desarrollo de este acontecimiento.

internacional no sólo manifestaba su interés por el proceso que se iba a llevar a cabo el 5 de octubre de 1988, sino que también estuvieron pendiente de lo que ocurría en el país andino, dado las elevadas adquisiciones de armas que el gobierno de Pinochet realizaba; estas compras eran, según ellos para prevenir conflictos. Las presiones internacionales fueron de tal magnitud, que el gobierno militar tuvo que dar respuesta a estas presiones disminuyendo, de manera significativa, su gasto en armamento. Esto se puede advertir claramente en el siguiente cuadro, en donde se aprecia la disminución en gastos bélicos del régimen militar, principalmente en los años anteriores al plebiscito cuando Chile comenzaba a vivir la transición democrática.

**Chile: Importación y exportación de armamentos
1977-1986
(en millones de dólares constantes de 1984)**

Año	Importaciones	Exportaciones
1977	60	0
1978	60	0
1979	180	0
1980	250	0
1981	310	6
1982	280	0
1983	90	0
1984	160	20
1985	20	19
1986	0	9

FUENTE: Carlos Portales 1993

La influencia del exterior en la transición democrática chilena desempeñó un papel muy importante, pues ésta incidió en el proceso interno en el sentido de que se trató de políticas de influencia y no de

desestabilización. El efecto de este tipo de políticas fue poner límites a las acciones arbitrarias del gobierno chileno frente a la alternativa de asumir los costos y sanciones, principalmente políticos, provenientes de la comunidad internacional. Como resultado se obtuvo el proceso de liberalización, posterior a 1983, por ejemplo, la protección a los partidos políticos, a sus dirigentes, se dieron márgenes de acción para la prensa; y sobre todo se contribuyó a generar las condiciones para la realización del plebiscito.

Las políticas estadounidenses, europeo-occidentales y latinoamericanas fueron alentadoras para los actores internos, tanto de la oposición como de sectores del mismo gobierno, que eran partidarios de una salida moderada.

El amplio apoyo político al Acuerdo Nacional de 1985, las presiones generadas para levantar los estados de excepción y el establecimiento de garantías en el proceso plebiscitario, dieron espacio para que pudieran ejercer su influencia, aunque todavía de manera limitada por el margen institucional militar, personas y grupos que favorecieron el establecimiento de un proceso con garantías.

Estas influencias externas también otorgaron un espacio para el desarrollo de ciertas fuerzas políticas como lo fue el Partido Renovación Nacional, éste desempeñó un papel muy importante en el reconocimiento de los resultados del plebiscito, e implementó una línea política, autónoma al gobierno y en favor de la transición.

En relación a la oposición, la influencia externa contribuyó primero a su sobrevivencia por medio del apoyo a las organizaciones de derechos

humanos,¹² a las sociales y sindicales, a la manutención y, después de 1983, al desarrollo de los partidos políticos. Finalmente, aunque no menos importante, contribuyó a la campaña cívica en torno al plebiscito, informando a la ciudadanía, desarrollando técnicas modernas de campañas políticas, etcétera.

Podemos señalar, a partir de lo anterior, que los factores internacionales eran importantes, aunque por sí solos no decisivos en la evolución del régimen chileno. La influencia externa fue muy importante en la conservación y consolidación de las fuerzas opositoras internas, como límite a los intentos autoritarios por revivir el proceso de liberalización que resultó del movimiento de las protestas y, luego, en la creación de un espacio político para las fuerzas liberalizadoras y moderadas, dentro del régimen, para la acción opositora en pro de un cambio pacífico; condiciones que ayudaron a la realización del plebiscito.

En cambio, los factores económicos internacionales desempeñaron un papel distinto.¹³ Fue a partir del giro que dio la política de la administración del presidente estadounidense Ronald Reagan que se usó, de forma moderada, la influencia económica como forma de advertencia al gobierno de Pinochet y así avanzar hacia una apertura democrática gradual y negociada (Portales, 1993: 494).

La transformación de las formas de convivencia interna y del proceso político llevó a que gobiernos, organizaciones internacionales y

¹² Entre éstos se pueden distinguir el Comité por la Paz, en los inicios del régimen, la Vicaría de la Solidaridad, desde la disolución del Comité, y después a la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

¹³ A principios de la década de los años 80, la política económica chilena siguió las pautas de los organismos financieros internacionales al realizar severos ajustes internos. La economía chilena recibió todo el respaldo de Estados Unidos y de los países de Europa Occidental, ello ocurrió durante el crítico periodo de 1983-1984, sin condiciones políticas.

otros actores fijaran su atención sobre la realidad chilena. En la medida que el proceso institucional, que llevó a la elección del Congreso Nacional, en diciembre de 1989, se transforme efectivamente en un camino de transición a la democracia, esto es, que dé paso a un sistema constitucional de amplia aceptación, el contenido de las relaciones internacionales del país podrá dejar de estar centrado principalmente en la vigilancia de los derechos humanos y en la forma de gobierno. Mientras el proceso de transición esté en curso, los actores externos seguirán atentos y desarrollando sus políticas de influencia sobre un proceso que tiene resolución interna.

3.4 El sindicalismo y la transición en Chile

El movimiento sindical fue un actor clave para mantener la capacidad de resistencia de la sociedad civil ante el régimen autoritario. Sin ese desempeño simbólico, activo y de contestación al autoritarismo de la dirigencia nacional y de los sindicatos a ella vinculados, seguramente no habría sido posible recorrer el largo camino que culminó el 5 de octubre de 1988 con la victoria de la oposición en el plebiscito. Los sindicalistas representaron la protesta social de grandes mayorías que estaban atemorizadas y desarticuladas. Ellos hicieron un puente entre el momento de desplome de la vida ciudadana y su resurgimiento.

El movimiento sindical, sin duda, contribuyó a la reactivación de la acción social y política que estuvo en la base de la transición democrática chilena. Su papel se reforzó cuando el movimiento sindical pasó del desempeño contestatario general, a la convocatoria de las protestas nacionales de 1983 a 1986 (Campero, 1984, 273). Este también fue un momento clave en el derrumbe, lento pero progresivo, del

régimen militar, pues hizo que la sociedad se reconociera a sí misma como una mayoría opositora.¹⁴

Su papel de actor clave en algunos de los procesos importantes, que llevarían a la transición, hizo posible que en las fases siguientes se desempeñara como un actor guía. Sin embargo, este papel tuvo que competir con el liderazgo político-partidario. Este fenómeno es frecuente en las transiciones conocidas en América Latina. En casi todas ellas, el actor político asume una relevancia mayor que el actor social en la fase de transición propiamente como tal, aunque ese actor social haya sido más importante en los periodos previos. En el caso chileno, el papel central del sindicalismo nacional se manifiesta tempranamente.

En la transición a la democracia los aspectos institucionales cobran gran relevancia. La discusión se centra sobre el cambio de un régimen a otro, es decir, de un tipo de instituciones a otras. En ese debate, los movimientos sociales y el sindicalismo intentan introducir en la discusión sus demandas sociales, lo que sin duda es su objetivo, pero esos temas están, en cierto modo, a menudo relegados al momento en que las "reglas del juego" institucional estén aseguradas. Por ello, un actor social como el sindicalismo nacional se encuentra en casi todos esos procesos en una situación compleja.

Por un lado el sindicalismo quiere ser parte del debate institucional, pero por otro, no puede abandonar la demanda social. Esta disyuntiva le produce cierta paralización, porque en ambos polos había riesgo para él. O se quedaba en el juego institucional y se alejaba de las reivindicaciones, o se concentraba en la demanda social, y entonces

¹⁴ En este aspecto, el movimiento sindical fue central en la apertura de las "compuestas sociales" que permitieron, después, la aparición del liderazgo político.

generar una doble demanda hacia el sistema político, situación que lo desestabilizaría.

La acción sindical se encontraba, sin duda, tensa entre las dos dimensiones del proceso de democratización. En términos concretos, el sindicalismo exigió las demandas políticas y sociales postergadas o insatisfechas de los trabajadores, así como presionó para que se repusieran las conquistas conculcadas por el gobierno militar. Pero, al mismo tiempo, se vio compelido a desempeñar un papel de agente regulador, de control social y político que demanda la transición democrática.

La capacidad del sindicalismo para asegurar entre sus bases la convicción de que durante la transición se garantizaría un horizonte de conquistas de largo plazo, más sólido que una explosión no regulada de demandas, fue un acierto de este sector social.

La posibilidad de que ello ocurriera dependió, sin duda, de que el sindicalismo fue parte activa, desde su origen, de la formulación política y programática en que se sustentó tal negociación. Fue también importante garantizar la independencia de los sindicatos, ello le ayudaría a juzgar, por sí mismos, los principios y consecuencias del orden acordado, lo cual fue esencial para asegurar su libertad de permanecer en el acuerdo. En definitiva, el sindicalismo desempeñó un papel de interlocutor entre los otros actores (Abramo, 1991: 146-47).

La adhesión de las bases sindicales a una solución de sus demandas de largo plazo, dependió de la satisfacción de ciertas condiciones mínimas, lo que generó en los trabajadores la convicción de que se

iniciaba, efectivamente, un proceso de cambio progresivo en torno a sus condiciones sociales y económicas.¹⁵

Es importante señalar que el sindicalismo enfrentó el desafío de ser portavoz de una base social laboral, que se había diversificado como consecuencia de las transformaciones de la estructura productiva del país. La antigua columna vertebral del movimiento sindical, constituida por la industria manufacturera, la minería, la construcción y el sector público, había visto reducidos sus contingentes y su importancia en la matriz económica. Al mismo tiempo, aumentaron los sectores privados de servicios, se modificó la composición de la fuerza de trabajo en la agricultura y se expandieron las actividades forestales y pesqueras. Paralelamente, hubo una gran masa de desempleados, en su mayoría jóvenes y mujeres. También cambiaron los sistemas de trabajo, extendiéndose el de régimen temporal y otras formas inestables (Abrano, 1991: 248).

De esta forma, el sindicalismo chileno, hasta entonces de tradición obrera y ubicado normalmente en situaciones de trabajo, tiene que plantearse una reconversión en sus formas organizativas y de representatividad, de tal manera que le permitan expresarse frente a la nueva diversidad de situaciones laborales. De lo contrario se arriesgaba a que el movimiento sindical quedara reducido sólo a una parte del sector laboral y perdiera su condición de ser la principal expresión, social y política de ese sector.

El movimiento sindical examinó sus modos de representatividad y diversificó sus formas organizativas, dando mayor empuje a una

¹⁵ Aunque ciertos sectores de gremio sindicalista tenían aun la sensación de que la transición no les estaba ofreciendo oportunidades nuevas, ello vino a debilitar su confianza en las negociaciones.

combinación de lucha tradicional del sindicato de empresa y de rama, hasta el ámbito local y regional, pasando por la afiliación de Interempresas, por las profesiones, e ideando formas de representación para los desempleados y subempleados.

3.5 Oposición popular al régimen

En cuanto a este tema, se perciben dos tendencias de debate estratégico en torno a la caída del régimen militar: para unos sectores opositores la verdadera estrategia o fórmula de transición era la fuerza de las movilizaciones, pues sólo ellas eran capaces, por sí solas, de crear una situación de "ingobernabilidad" o desestabilización del régimen;¹⁶ para otros, se produciría una situación de colapso con el retiro automático de las Fuerzas Armadas, donde las fuerzas civiles tendrían que llenar el vacío de poder que se creaba (Garretón, 1993: 408). Algunos sectores de tendencia centrista fueron llamados por el cardenal Fresno para negociar con el régimen, en agosto de 1983, planteaban la salida de Pinochet como condición de cualquier negociación, lo que la hacía inviable. Por otro lado, los sectores de tendencia izquierdista se negaron a cualquier posible negociación.

Todos los movimientos de oposición asumieron, tres objetivos conjuntos: 1) salida de Pinochet, 2) implantación de un Gobierno Provisional y 3) creación de una Asamblea Constituyente, además declararon ilegítima la Constitución de 1980 y cualquier mecanismo incluido en ella.

¹⁶ Esto, a su vez, llevaría a que las Fuerzas Armadas se desprendieran en algún momento de Pinochet para negociar con los civiles su retiro del poder.

Por su parte, el Partido Comunista planteaba estrategias insurrectas acogía entre sus filas a un numeroso grupo de jóvenes radicales que pertenecían a organizaciones poblacionales, quienes desconfiaban de las instituciones y las formas de concertación política. Todo esto reforzaba su línea política de asumir "todas las formas de lucha" privilegiando aquellas de contenido violento y heroico.¹⁷

En todos estos casos, la negociación que apuntaba hacia el rendimiento incondicional, las movilizaciones que pretendían el colapso del régimen y los levantamientos insurreccionales que buscaban la derrota militar; no había, propiamente, un diseño estratégico. El precio de todas estas deficiencias fue que las movilizaciones se debilitaron, pues, carecían de una estrategia de transición y de fórmulas institucionales que hicieran posible el retiro de las Fuerzas Armadas en momentos de debilidad porque subestimaron al régimen. Se produjo de esta manera una retracción de vastos sectores medios, atemorizados por las formas más radicales de movilización. Esto llevó al aislamiento de núcleos de militantes civiles mientras las formas más duras de agitación crearon una situación de colapso (de la Maza, 1987: 189).

A pesar de lo conflictivo del proceso el régimen se transformó, pues se crearon espacios de acción colectiva inéditos y la sociedad civil se fortaleció.

Posteriormente, con el descubrimiento de arsenales clandestinos y el atentado contra Pinochet, en 1986, los cuales fueron relacionados con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, se implantó el estado de sitio y los sectores contrarios al régimen estuvieron desmovilizados temporalmente,

¹⁷ Ello explica la consolidación de las formas político militares del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y de las Milicias Rodriguistas, en relación ambos con el Partido Comunista, aunque más adelante se produzca un claro distanciamiento.

estos hechos marcaron una nueva fase. Desde el punto de vista del régimen, ésta se caracterizó por la aplicación de la institucionalidad que aseguraba el cumplimiento del itinerario previsto en la Constitución, es decir, el plebiscito.¹⁸

Desde el punto de vista de la oposición, este periodo marcó el paso progresivo y desigual, por parte de sus componentes, hacia la comprensión del carácter de las transiciones de este tipo de régimen militar a uno democrático. La experiencia de las movilizaciones y la rearticulación del régimen, después de los arsenales clandestinos y el atentado contra Pinochet, así como el aprendizaje de otras experiencias de transición democrática en el Cono Sur, Europa y Asia, fueron poco a poco homogeneizando la perspectiva de que no terminaría el régimen militar por colapso o derrocamiento, sino por medio de un proceso político.¹⁹

En cuanto a las organizaciones sociales se produjo un doble movimiento. Se constituyó, en agosto de 1988, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que fortalecía la autonomía del movimiento sindical e incorporaba un nuevo actor para la transición y consolidación democráticas. Al mismo tiempo, el Acuerdo Social por el **NO** (ACUSO) se constituía en un representante de la sociedad civil para enfrentar la campaña. Además se organizaban agrupaciones representativas de sectores independientes, empresarios y expartidarios del régimen, todos

¹⁸ Esto incluía una cierta recuperación económica, especialmente en lo que se refiere al problema del endeudamiento externo, y la promulgación de las leyes políticas, complementarias a la Constitución, tales como la ley de partidos, de registros electorales, votaciones y escrutinios, etcétera. Además de las operaciones necesarias para asegurar la candidatura de Pinochet y su triunfo en el plebiscito.

¹⁹ Aunque también, dado el tiempo perdido y la incapacidad de la oposición de presentar una estrategia para el término del régimen, ese proceso político, inevitablemente, se apegaría a las formas institucionales previstas por el régimen para perpetuarse.

ellos realizaban sus propias actividades de movilización, pero de hecho se subordinaban a la conducción política de los partidos. De modo que se producía una mutua alimentación y no las tensiones o contradicciones de los periodos anteriores.

Sin embargo, no bastaba con cambiar a la mayoría social contraria al régimen de Pinochet en mayoría política, sino que era necesario, a su vez, transformarla en *mayoría electoral*. Es decir, se trataba de ganar una campaña electoral y asegurar que sus resultados fueran válidos y reconocidos por la dictadura. Todo ello se hacía en condiciones extremadamente difíciles.²⁰

Este proceso de generar una mayoría electoral implicó varias tareas: por un lado, la campaña por inscribir en el padrón al mayor número de electores para legitimar el plebiscito. Aquí el problema principal era vencer la resistencia y escepticismo de sectores sociales contrarios a la dictadura, que no creían en la posibilidad de terminar con ella por esta vía, pues veían un fraude inevitable.²¹ Por otro lado, una vez levantado el padrón el paso siguiente sería vencer el miedo y la resistencia de sectores indecisos. Éstos podían inclinar la balanza sobre el régimen, en la medida que percibieran en la oposición una vuelta al pasado o una incertidumbre en el futuro, lo que el gobierno alimentaba con su propaganda. Combinar en la campaña las dos grandes demandas de cambio y seguridad era fundamental para repolificar, en un sentido

²⁰ Pinochet usaba para su campaña todo el aparato estatal, las autoridades regionales y municipales, la intervención directa de altos mandos de las Fuerzas Armadas, el control de la televisión, al menos hasta el último mes, en que la oposición tuvo acceso a un espacio mínimo en ella. A esto hay que agregar que ni la fecha ni el candidato fueron determinados sino hasta un mes antes del plebiscito, lo que dificultaba la campaña de la oposición.

²¹ El resultado de esta campaña fue el número más alto de inscritos en la historia electoral, es decir, estamos hablando de poco más del 90% del total potencial.

positivo a la sociedad. Para ello era necesario abandonar ideologismos, aislar las tendencias más radicalizadas y divisionistas en la oposición u obligarlas a subordinarse a la estrategia unitaria (Garretón, 1993: 426).

Al mismo tiempo era encerio vincular, en un acto electoral, las expectativas individuales y colectivas de una mayor dignidad con el hecho de votar por el **NO**. Para esto, el uso de los medios de comunicación y el contacto directo de los grupos de oposición con la gente eran imprescindibles. Pero ello sólo se podía lograr en un clima con mayor libertad que el de los últimos quince años.

Se tenía que competir, también, por la mayoría electoral y la conquista de ciertas condiciones mínimas para la oposición en el periodo del plebiscito, lo que originó una lucha por diversas garantías: el levantamiento de estados de excepción, término de exilio, corrección y carácter público del proceso de inscripción, acceso a la televisión, etcétera. Si bien con lo anterior no se creó un clima de total ecuanimidad, lo que era importante en este acontecimiento histórico; al menos se neutralizaron los intentos del gobierno de manipular el plebiscito y permitió una repolitización de la sociedad, que favoreció la pérdida del miedo.²²

También se debía asegurar el reconocimiento de la victoria electoral e impedir tanto el fraude como los intentos de golpe que pudieran buscarse como respuesta a la inminencia del triunfo opositor. En esta materia, nuevamente los grupos de oposición permitieron asegurar un

²² Así, sin que hubiera negociación directa entre el gobierno y la oposición, el primero tuvo que ceder a las presiones de la segunda, de la Iglesia y de la opinión internacional. Sólo de esta manera, podía dar un mínimo de credibilidad y legitimidad al mecanismo que él mismo había creado para su perpetuación.

sistema propio e independiente del gobierno, en lo referente tanto al control del acto electoral, como al cómputo de votos. Esto permitió rápidamente demostrar el triunfo de la oposición. La credibilidad contó con el apoyo de un enorme contingente de representantes y observadores Internacionales, lo que hacía improbable un desconocimiento por parte del gobierno.

Todos estos elementos y manifestaciones opositoras al régimen militar contribuyeron al triunfo de la oposición en el plebiscito, tal como lo muestra el cuadro siguiente:

**Resultados del plebiscito chileno
realizado el 5 de octubre de 1988**

SI	NO	Abstención	Participación
			Total
40.01%	52.72%	2.39%	94.11%

FUENTE: Garretón, 1993: 644.

De esta manera se puede ver cómo el plebiscito fue concebido como un mecanismo de reproducción del régimen y de conservación de Pinochet en el poder, los grupos opositores lograron convertirlo en una instancia efectiva de politización y democratización parcial de la sociedad, de unificación de bloques y tendencias históricamente antagónicas. Y, al triunfar, con en él se permitió avanzar en el proceso de transición.²³

²³ Es importante señalar que se replantean las tareas de la oposición como tal, ya que anteriormente había actuado contra un régimen dictatorial, pero a partir de aquí, se transforma en un actor *dirigente* y no sólo reactivo de un proceso, en donde los resultados dependerán de ella.

3.6 Partidos políticos y transición democrática

La inserción institucional de los partidos

Con el régimen militar, y como parte del proceso de institucionalización política, previo al plebiscito, los partidos fueron sometidos a una determinada legislación que implica severas restricciones, controles y exclusiones, que obliga a procesos complejos a adquirir el reconocimiento jurídico que les permite actuar en la política. Sin embargo, por primera vez se tiene una institucionalidad que rige para los partidos políticos, la cual permitió la inscripción de partidos de oposición y que además pudieron tener acceso a la Televisión y realizar todo tipo de actividades para controlar el proceso plebiscitario.

Por otro lado, en la ley electoral del gobierno se pretendía establecer un sistema mayoritario binominal. La oposición criticó tanto la ley de partidos como la ley de distritos, que buscaba asegurar un parlamento controlado por el régimen, y sectores derechistas ven con peligro la rigidez del sistema electoral, que puede darle, en un momento dado, la mayoría a la oposición, esto sería posible en la medida que la derecha no lograra su unidad orgánica.²⁴

La inscripción de los partidos significó un proceso de repolitización de la sociedad chilena, en la medida que para lograrlo se tenía que recabar el mayor número posible de firmas. Esto significó romper relativamente el aislamiento de los partidos respecto de la sociedad y lograr ser vistos y reconocidos por ella, aun cuando todavía no se daba el proceso electoral. Por otro lado, la ley obliga al establecimiento de un

²⁴ No se discutirá aquí ni las características de la legislación ni las propuestas opositoras alternativas pero sí señalaremos las consecuencias de esta institucionalización, pues su legitimidad de origen ha tenido ya efectos con los que hay que contar y que no podrán borrarse fácilmente.

sistema de elecciones internas que favorece la democratización y expresión de las bases de los partidos.

Tanto la institucionalidad del régimen de partidos como las propuestas opositoras tienden a favorecer un sistema de partidos grandes o medianos y eliminar a los partidos chicos. En la perspectiva del gobierno se trata de llegar a un sistema bipartidario, lo que es absolutamente irreal y ahistórico en el caso chileno. Así, sin llegar a extremos como el bipartidismo, la alternativa es la creación de un sistema de partidos, en donde la cuestión central sería las coaliciones mayoritarias.

En estos momentos en Chile apareció una doble realidad político-partidaria. Por un lado se encontraban los partidos legalmente reconocidos y que además contaban con una larga trayectoria: Democracia Cristiana, Partido Radical y el Partido Nacional; o de partidos creados bajo el régimen militar como la Unión Democrática Independiente, Avanzada Nacional, Renovación Nacional y Radical Socialista. Por otro lado, están los partidos legalizados o en proceso de legalización, por ejemplo el Partido por la Democracia (PPD), cuyo núcleo es el Partido Socialista Núñez, también en esta etapa de legalización se encuentra el Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS), que aparece como una federación de partidos de izquierda. Este marco permitió legalizar a sectores que, de otro modo estarían proscritos, y la institucionalización a la cual se enfrentaron sirvió, de manera significativa, para dar otro paso hacia adelante en la transición democrática.

Relaciones y coaliciones entre partidos

El sistema partidario chileno se caracterizaba por la rigidez en el proceso de alianzas, excepto dentro de cada sector, y por privilegiar tendencias centrifugas y polarizantes llevaban al poder a gobernantes apoyados por una minoría, quienes proponían proyectos globales de gran envergadura, los cuales desataban oposición de la mayoría parlamentaria y no contaban con el respaldo social y político para llevarse a cabo (Garretón, 1993:360).

La necesidad de reconstruir un sistema institucional para hacerlo verdaderamente democrático, llevó a un pacto, con reglas consensuales, entre todos los partidos.

En la política de institucionalidad del régimen militar, por medio del plebiscito, se generó una situación inédita de bipolaridad, pues la Concertación de Partidos por el **NO**, convertida en Concertación de Partidos por la Democracia fue el germen de un liderazgo alternativo.

Las transformaciones en el campo socialista y su posible tendencia a la reunificación en una sola fuerza política, rompen el eje tradicional de la política de izquierda, como era el caso de la relación Partido Comunista-Partido Socialista la cual pone, como cuestión central, la capacidad autónoma de esta fuerza para buscar alianzas entre el Centro y la Izquierda.

El surgimiento de una nueva fuerza como lo es el Partido por la Democracia, con potencial electoral para sobrepasar la división entre centro e izquierda, desafió la hegemonía de ambos, tuvo también la capacidad de disputar el liderazgo y de hacerlos converger, lo cual dio la posibilidad de una coalición de centro-izquierda a largo plazo.

Partidos políticos y sociedad

El régimen militar dislocó la relación entre los partidos políticos y la sociedad chilena, y el espacio y las funciones que cumplían los partidos políticos fueron, en parte, sustituidos por otros actores sociales, tales como la Iglesia. Sin embargo, en el proceso de apertura y de transición, la campaña plebiscitaria y la legalización de partidos por medio de campañas masivas de firmas, permitió un reencuentro entre partidos y sociedad.²⁵

Es importante destacar que en algunas encuestas de opinión existía una desconfianza generalizada y un bajo reconocimiento de la sociedad con respecto a los partidos políticos. Esto forma parte de una aguda crisis de desconfianza por todas las instituciones, pero se acentúa especialmente en el caso de los partidos políticos. Paradójicamente, cuando del sistema de partidos emanan mensajes claros y unificados que apelan a sentimientos comunes, no hay actores que canalicen mejor las acciones colectivas, como lo mostró el plebiscito. Esto significa que la opinión pública reconoce, en general, el papel que deben desempeñar los partidos políticos, sin embargo no le otorga una confianza incondicional, y no acepta tan fácilmente su injerencia en campos que no sean el estrictamente políticos.²⁶

El siguiente cuadro forma parte de las encuestas realizadas momentos antes de la elección parlamentaria chilena, y tuvo por objeto

²⁵ De alguna manera pudo verse acompañado en el periodo plebiscitario por los conflictos internos de los partidos, especialmente en la Democracia Cristiana, en torno a sus liderazgos nacionales.

²⁶ Al mismo tiempo, esto significa que los partidos no pierden su lugar como tales en la sociedad, pero dejan de ser los únicos canales o actores, lo que también expresa una demanda por participación fuera del marco partidario y una exigencia de democratización al interior de los partidos.

medir la aceptación o rechazo de la población respecto de determinados partidos políticos.

Resultados de opinión sobre la aceptación con que cuenta cada partido político, 1990

Partido Político	Muy a favor	A favor	Indiferente	En contra	Muy en contra	Nc/Nr
Avanzada Nacional	1.6	8.2	22.7	14.2	14.2	30.5/8.6
Izquierda Cristiana	1.5	22.3	28.8	16.4	4.2	17.8/9.1
MIR	1.4	7.5	20.8	27.2	23.2	10.4/9.5
Comunista	2.0	13.5	22.0	28.0	19.7	4.9/10.0
Demócrata Cristiano	12.6	42.4	21.5	8.8	2.4	4.0/8.3
Nacional	3.2	23.4	26.7	21.2	7.4	8.8/9.3
Radical	1.6	18.7	38.2	14.7	1.6	15.1/9.9
Socialista	4.7	22.6	26.0	23.0	5.6	8.5/9.5
Renovación Nacional	2.1	10.7	20.2	12.9	11.7	33.3/9.0

Fuente: Baño, 1991: 96.

Con respecto a los actores y movimientos sociales la relación con los partidos se complementó. Así, en el campo sindical, estudiantil y gremial, a las opiniones pragmáticas y electorales siguieron las líneas de la afiliación partidaria y sus representantes pasan a formar parte del liderazgo partidario. Mas ello es fruto de un proceso arduo de lucha por la autonomía dentro de los mismos partidos, los cuales debieron ceder parte de ésta para no arriesgar su presencia en esos ámbitos. (Garretón, 1989: 461).

En estos momentos de transición, la autonomía de los movimientos y actores sociales parece ser mucho más grande en aquellos nuevos espacios que se han abierto como parte de la lucha contra dictadura militar: los movimientos de derechos humanos, de mujeres, de grupos intelectuales y culturales. Lo cual no significa que todos ellos, y generalmente en su fundación, hayan participado militantes y dirigentes partidarios, pero, progresivamente éstos tienden a definirse más como "militantes" del respectivo movimiento y a prescindir de la dirección partidaria.²⁷

Más que haberse fundado una nueva relación entre partidos y sociedad civil, "asistimos al paso transicional de un modelo de 'imbricación' entre el liderazgo partidario y liderazgo social, a un modelo de 'tensión' entre partidos y actores sociales, con la tendencia a una mayor, aunque relativa y desigual, autonomía de éstos" (Garretón: 1989: 462).

Son tres los sectores que se han caracterizado en el transcurso histórico partidario de Chile, ellos reaccionaron de formas diversas con respecto a la transición democrática: a) La Derecha, b) El Centro y c) La Izquierda.

a) La Derecha. El sector más tradicional de este grupo se fragmentó y de ello surgió un grupo pequeño, pero significativo, que se integró, en 1983, a la oposición mediante la Alianza Democrática. Pero al mismo tiempo este grupo intenta su reorganización, primero, por medio de

²⁷ Por supuesto que esto es diferente para cada partido y movimiento o actor social; pero el discurso en la autonomía de los movimientos sociales tiende a transformarse en un sentido común relevantemente operativo.

quien fuera Presidente del Partido Nacional en el momento de su autodisolución, Sergio Onofre Jarpa.²⁸ Posteriormente, por medio de dos organizaciones en las que se expresan dos vertientes del antiguo Partido Nacional: Unión Nacional y Partido Nacional.

Las agrupaciones derechistas, principalmente la Unión Democrática Independiente (UDI), Unión Nacional, el Frente del Trabajo, con excepción del Partido Nacional y de los sectores nacionalistas; intenta la reunificación del Partido Renovación Nacional, el cual se inscribe como partido en 1987. Sin embargo crecen las divergencias entre el sector heredero del régimen militar y muy ligado al aparato de gobierno, es decir la UDI y el sector que busca proyectarse como partido de derecha democrática en el futuro.²⁹

La UDI, por su parte, realiza su propio proceso de registro. Por otro lado, el Partido Nacional, durante el plebiscito, sufre una importante división entre quienes optan por votar contra el régimen y quienes tardíamente oficializan su adhesión por el **SI**. El grupo que se incorporó a la oposición por medio de la Concertación de Partidos por la Democracia constituyó el Partido Alianza Centro (PAC). El sector más gobiernista se mantiene como Partido Nacional, pero sumamente reducido en su proyección.³⁰

Lo que fundamentalmente ocurre en la derecha chilena es una división entre quienes son partidarios de la dictadura y de la apertura, que además desean continuar con la esencia del modelo socio-

²⁸ Dirigente que fue nombrado Ministro del Interior por Pinochet, en el momento más álgido de las protestas para iniciar un apertura.

²⁹ Este último sector toma una gran distancia de la figura de Pinochet en las vísperas del plebiscito de 1988, sin embargo mantiene su adhesión a la opción **SI** en el plebiscito.

³⁰ El futuro orgánico y político de estos dos pequeños sectores se hace más crítico con las elecciones parlamentarias de 1989, donde ninguno obtiene representación, previéndose su reubicación en alguna otra colectividad.

económico y político de la dictadura y aquéllos que viendo cómo era inevitable el advenimiento del régimen democrático buscan ocupar en él el espacio de la derecha política (Garretón, 1990: 3). Renovación Nacional logró el liderazgo de esta última posición, tal como lo demuestra el acuerdo para las reformas constitucionales realizado con la Concertación de Partidos por la Democracia.³¹

Previo a las elecciones, la derecha intenta acercarse hacia sectores de centro del electorado, por medio de una modernización en su estilo y programa. Dentro de ella continúa la disputa por las candidaturas presidenciales, donde el sector más ligado al gobierno, la UDI, postuló al presidente del Partido Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa, pero finalmente se plegó a la candidatura de H. Buchi, apoyada por la UDI. El predominio de la tendencia independentista y antipartidaria de la derecha hizo muy difícil su estructuración como actor unificado en un futuro régimen democrático.

El resultado de las elecciones permite indicar que el bloque Democracia y Progreso, que incluía a la UDI, Renovación Nacional y otros independientes obtuvo el 33.35% de votos para diputados y 35.4% para senadores, estos resultados no arrojan conclusiones definitivas, pues no todos los partidos, por efecto de la ley electoral, pudieron llevar a sus candidatos a todas las provincias (por lo que no obtuvieron una votación "nacional"), por lo que se vieron obligados a pactar con otros partidos (Garretón, 1990: 5).

³¹ En el mes de junio de 1989 se concretó un acuerdo para reformas constitucionales mínimas entre Renovación Nacional y la Concertación de Partidos por la Democracia, que fue aceptado por el gobierno y que, sobre todo, tiende a flexibilizar el mecanismo de reforma constitucional en el futuro. Ello fue plebiscitado en junio de 1989, permitiendo así, que la realización de las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre de ese año se efectuaran bajo un marco aceptable, aunque con reparos para la oposición.

b) El Centro. Después del inicio de las protestas en 1983, la Democracia Cristiana (DC) encabeza la Alianza Democrática, ésta está formada por pequeños sectores de derecha, centro e izquierda socialista, cuyo objetivo principal es, según la Democracia Cristiana, el establecimiento de una alianza con sectores de izquierda socialista.

La Democracia Cristiana (DC) asume el liderazgo de sus sectores centrista y derechista en el momento en que se une al conjunto de la oposición en la lucha, dentro del marco institucional, para derrotar políticamente al régimen militar en el plebiscito de 1988, esto se manifestó en la búsqueda de una alianza privilegiada con otros sectores de centro, por ejemplo la llamada Coalición de Centro que incluía a la misma DC, al Partido Radical y a grupos menores, y la búsqueda de una hegemonía dentro de la Concertación.³²

El debate interno, demócrata cristiano, en torno a la candidatura presidencial provocó profundas divisiones, lo cual afectó al conjunto de la Concertación y mostró claramente la existencia de dos proyectos distintos en el seno del partido. Uno, que intentaba repetir la idea del "camino propio", aunque incorporaba algunos sectores menores de centro, con la esperanza de consolidar, a largo plazo, una alianza de Centro Derecha o exclusivamente de Centro, donde la Democracia Cristiana tuviera un liderazgo indiscutido. Otro, que recoge la experiencia de las últimas décadas y busca consolidar una alianza con la izquierda, definiendo más a su partido como de izquierda que de centro. Se impuso esta segunda propuesta y el debate en torno a las

³² Después del triunfo de la oposición en el plebiscito, transformada la Concertación por el **NO** en Concertación del Partidos por la Democracia, vuelven a predominar tendencias proclives al hegemonismo demócratacristiano, pese a las afirmaciones sobre la mantención de la Concertación.

candidaturas parlamentarias de la oposición mostró una tendencia al predominio de la DC .

Pese a todo, la Democracia Cristiana es el partido más organizado y estructurado nacionalmente, con una tendencia natural al liderazgo dentro de la oposición a la dictadura. Este partido obtuvo la primera mayoría relativa en las elecciones de diputados con un 26.14% y senadores con un 32%, respectivamente, y cerca de la mitad de los ministros en el primer gabinete del gobierno de Patricio Alwin (Garretón, 1993: 436).

c) La Izquierda. Los militantes comenzaron a entrar en un proceso de renovación ideológico-político, que afectó en forma desigual a las diversas fracciones orgánicas. Esta renovación rescata la autocrítica y algunas tradiciones del mundo socialista chileno. Así, se busca su modernización, se revaloriza la democracia política, se hace una crítica de los modelos socialistas existentes, se aparta de la tradición leninista, eje socialista-comunista, la cual deja de ser básica para la política de izquierda y a la larga busca conformar un "bloque por los cambios", junto a los sectores del centro, para realizar transformaciones económicas, sociales y políticas (Garretón, 1987: 303).

De igual manera, se producen reunificaciones y recomposiciones que hasta mediados de 1989 se expresaban en dos grandes partidos socialistas.³³ Un ejemplo de ello es el interés que el Partido Socialista de Núñez tenía por una alianza con el centro, y estaba más impregnado de la renovación socialista.

³³ Principalmente en los denominados Partido Socialista de Núñez o Arrate y de Almeyda, por el nombre de sus secretarios generales.

La reunificación de los dos partidos socialistas en uno solo se facilitó debido: a la convergencia en la misma línea política, por las presiones electorales, por la necesidad de definirse en torno a la participación del MAPU y de importantes contingentes del Partido Izquierda Cristiana, esta reunificación se cristalizó en diciembre de 1989 y aparece como uno de los puntos cruciales en la recomposición del sistema partidario posterior a la dictadura. Sus repercusiones en la izquierda, como en la flexibilización del sistema de alianzas para generar una coalición mayoritaria con el centro y la izquierda ortodoxa tradicional, son, sin duda, de alcance histórico.

Para las elecciones parlamentarias de 1989 el Partido Socialista obtiene a pesar de no estar unificado ya que sus dos sectores se presentaron en partidos diferentes, aunque con acuerdos entre ellos, cuatro senadurías (tres del sector Arrate y una del Almeyda, en total, 10,5% y 19 diputaciones (seis para Almeyda, once para Arrate y dos del MAPU incorporados al PS, en total, 15,8%), convirtiéndose así en la tercera fuerza política del país y el segundo partido de la coalición de gobierno (Garretón, 1990: 8), lo que se expresó en seis ministerios del primer gabinete.³⁴

Antes de su unificación, los dos principales partidos socialistas habían perseguido estrategias de legalización distintas, lo que creó algunos problemas para la reunificación socialista. Así, el Partido Socialista Núñez o Arrate, que había estado en la Alianza Democrática creó, junto a grupos menores de izquierda, centro, derecha e independientes, el

³⁴ Por otra parte, coexisten grupos socialistas menores que, o se absorben en el Partido Socialista, ahora unificado, o desaparecerán. Lo mismo puede decirse de aquellos grupos que, venidos de la Democracia Cristiana (Izquierda Cristiana) o del viejo tronco del Partido Radical, algunos de los cuales ya se han reabsorbido vacilan entre su incorporación al socialismo reunificado o la persistencia en la "identidad" y "camino propios".

Partido por la Democracia (PPD), éste adquirió una enorme popularidad y arraigo durante la campaña plebiscitaria de 1988. Ello sobrepasó el carácter puramente instrumental que sus fundadores le habían dado y las encuestas lo ubicaron en el segundo lugar después de la Democracia Cristiana.

En las elecciones parlamentarias el PPD obtuvo el 10.98% de la votación para diputados y el 11.9% para senadores, obteniendo cuatro senadurías (el 10.5% de los cuales tres son para el P S Arrate) y 17 diputaciones (el 14.1% once para el P S Arrate), convirtiéndose en el segundo partido de la Concertación por la Democracia y en el tercero en representación parlamentaria en el país (Garretón, 1990: 9). En el parlamento, el partido socialista es claramente hegemónico, pero su potencial electoral va mucho más allá de la capacidad de convocatoria del socialismo, en la medida que abarca grandes masas juveniles y penetra en sectores modernizados de izquierda.

Después del plebiscito y presionado tanto por otros partidos de izquierda como por sus propias necesidades de legalización, ante las de elecciones en 1989, el Partido Socialista Almeyda, junto con el Partido Comunista, la Izquierda Cristiana, entre otros, creó y legalizó el Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS). Como entidad política, se acercaba más a una federación que el PPD y, si bien resolvía el problema de la legalización de sectores socialistas y comunistas proscritos, planteaba dos problemas al resto del sistema partidario. El primero era que, estando los dos partidos socialistas legalizados en diferentes "partidos instrumentales", su reunificación debía postergarse por razones técnicas y políticas. El segundo era la tentación de reproducir la izquierda clásica (la Unidad Popular), sin tomar en cuenta

que durante este periodo se fueron configurando en la práctica dos izquierdas, una socialista constituida por el PPD y el PAIS y, otra de corte ortodoxo-tradicional representada por el Partido Comunista (Garretón, 1990: 10).

Capítulo 4

El proceso político de transición democrática chilena, el aprendizaje y la reacción participativa de los actores políticos han dado características particulares a la transición en el país estudiado. Entre las singularidades de este proceso podemos mencionar las siguientes.

Con la crisis económica de 1981-1982 se originan signos de resquebrajamiento en el seno del régimen chileno. Este colapso en la economía fue el detonante último que activó todo un movimiento de protestas que sacudió al régimen, y durante tres años la oposición organizó todos los meses "un día de protesta nacional".

Las organizaciones que reaccionaron a esta situación fueron principalmente defensoras de derechos humanos, grupos de mujeres amas de casa, algunos sindicatos y pequeños empresarios. Es decir, son organizaciones que aún no forman parte de los actores de oposición como son los partidos políticos.

Las constantes presiones externas y los actores de oposición al régimen obligan al gobierno militar a una apertura política que facilite la transición democrática.

En esta etapa de apertura se advierte también un proceso de "liberalización", dado que el gobierno de Pinochet comienza a hacer efectivos ciertos derechos, respondiendo de manera directa o indirecta a las presiones opositoras, por ejemplo accediendo a otorgar salvoconductos a asilados y revocando algunas medidas contra ciudadanos extranjeros.

Un elemento significativo de la apertura hacia la transición democrática chilena son las políticas mínimas de liberalización que los actores externos y las organizaciones de oposición exigen al gobierno

militar y éste último no tiene otra alternativa más que ceder un poco ante las presiones.

Los movimientos de protesta en la etapa de liberalización tuvieron un efecto multiplicador, pues si bien las protestas eran reprimidas esta situación no se comparaba con los momentos más represivos y duros del régimen, donde las desapariciones, asesinatos masivos y selectivos estaban a la orden del día. Este efecto se manifestó toda vez que algunos sectores se atrevieron a ejercer su derecho de manifestación, así como libertad de organización y no fueron castigados por ello. Esto trae como secuela el aumento de protestas y abre la posibilidad de que otros actores se atrevan a ejercer sus derechos.

En el proceso de apertura política los actores de gran relevancia que intervienen en ella son organismos opositores al régimen que aún no están constituidos en partidos políticos.

Por otro lado, es importante señalar que los factores externos desempeñaron un papel significativo, pues las presiones externas dirigidas principalmente por la violación de los derechos humanos presionó para que la política del gobierno militar optará por institucionalizar y legitimar su gobierno mediante la constitución de 1980. Ergo las presiones internacionales fueron un aporte sustancial para la apertura política y el avance de la transición, ya que fueron muchos los países que se manifestaron a favor del proceso.

La expresión cada vez más libre de los intereses e ideales, luego de la liberalización en Chile, así como el alto grado de indeterminación e incertidumbre son características típicas de los fenómenos de transición. En el proceso chileno de transición, los actores no pueden especificar qué papel desempeñarán en el transcurso del mismo o qué posiciones

adoptarán en determinadas circunstancias. En esos instantes cruciales de transición la mayor parte de los actores están divididos y vacilantes en lo que concierne a sus intereses e ideales, por ello fueron incapaces de emprender una acción coherente que diera respuesta al régimen militar, es decir, carecían de un plan alternativo para avanzar hacia la transición democrática.

Muestra de lo anterior es la incertidumbre que sufren los sindicatos, organizaciones de mujeres y de pequeños empresarios que no quieren ser identificados con ningún partido político, pues su interés principal es la lucha por las reivindicaciones sociales de los sectores que representan.

Durante el proceso de transición en sí, quienes asumen ahora el papel protagónico son los partidos políticos, pues sin su participación el desarrollo de la transición, como el caso chileno, no puede ser posible.

Un aspecto importante del proceso de aprendizaje en los partidos fueron las alianzas que impulsaron los tres sectores partidarios. Los bloques o alianzas políticas se realizan con el objetivo de derrotar, en 1988, al gobierno militar en el plebiscito y en las elecciones parlamentarias de 1990. Los partidos establecen una negociación pactada, lo cual es muy significativo pues fueron diecisiete las fuerzas políticas que llegaron al acuerdo de derrotar al gobierno autoritario mediante la vía electoral.

Previo a las elecciones de 1990 los actores sociales complementan su relación con los partidos políticos. Así, en el campo sindical, estudiantil y gremial de las posiciones al margen de los partidos políticos siguieron las líneas de afiliación partidaria, y sus representantes pasan a ser parte del liderazgo partidario.

Por su parte, los actores a favor del régimen también entran en esta dinámica de aprendizaje e intentan reestructuraciones en sus planteamientos, con el objeto de acercarse más a la sociedad. Un ejemplo de esto es la organización de mujeres liderada por Lucía Hiriart de Pinochet, que durante la campaña plebiscitaria enfocó, junto con el gobierno, buena parte de su trabajo al sector femenino, pues la mayor parte de los votantes fueron mujeres. De esta forma la organización de mujeres y el mismo gobierno adecuaban su discurso con el objeto de ganar la mayor simpatía posible hacia su campaña.

La Confederación de la Producción para el Comercio (CPC), organización que agrupa a los grandes empresarios chilenos inicia una campaña discursiva, al mismo tiempo que modifica su participación en el campo político, pues si bien durante el proceso plebiscitario habían quedado un poco relegados, ahora, en el proceso electoral de 1990, quieren desempeñar un papel protagónico y más activo. Con su lucha discursiva intentan dar carisma y fuerza al gobierno militar para así convencer al mayor número de votantes para mantener estable el sistema de gobierno que de alguna forma los ha beneficiado. Los actores sociales y políticos a favor del régimen ocupan un papel secundario pues aunque contaban con más recursos para desarrollar sus campañas, no lograron motivar la voluntad del electorado como lo hizo la oposición.

En la transición democrática chilena los actores de oposición son quienes se empeñaron en impulsar este proceso histórico en el país. Convirtieron a las mayorías contrarias al gobierno en mayoría electoral. Construyeron nuevos espacios de opinión para ganar la campaña electoral de 1990, ello aseguró que los resultados fueran válidos e

Incluso, reconocidos por la dictadura. Es importante señalar que todo esto lo hacían en condiciones extremadamente difíciles.

Vencieron la resistencia y escepticismo de sectores sociales contrarios a la dictadura, que no creían en la posibilidad de terminar con ella por la vía electoral, pues vislumbraban un fraude inevitable; esta desconfianza en el proceso electoral se debía a que el plebiscito fue concebido como un mecanismo de reproducción del régimen y de conservación de Pinochet en el poder, pero los grupos opositores convirtieron el proceso plebiscitario en una instancia efectiva de politización y democratización parcial en la sociedad, de unificación de bloques y tendencias históricamente antagónicas.

Los gobiernos y actores externos siguieron muy de cerca el desarrollo de este proceso histórico. Su participación coadyuvó a poner límite a las acciones arbitrarias del gobierno chileno, algunos de sus logros fueron el proceso de liberalización, la protección a los partidos políticos, a sus dirigentes, dar márgenes de acción para la prensa y sobre todo, contribuyeron a generar las condiciones para la realización tanto del plebiscito como de las elecciones parlamentarias. Todos estos elementos ayudaron al triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias de 1990.

Un proceso histórico en el que se desarrolla la transición democrática chilena es el fin de la denominada Guerra Fría; a partir de este contexto puede entenderse la posición de países capitalistas como Estados Unidos, Francia, Suecia, etcétera, con el apoyo al proceso de transición chileno demostraban el ánimo político internacional de impulsar la democracia, al mismo tiempo que brindaban signos de buena voluntad para dar fin a la guerra entre el capitalismo y el socialismo

¿Y después de las elecciones qué?

Lo que vive Chile después de la instauración de un gobierno democrático es un proceso destinado a complementar la transición política, lo cual no es tarea fácil de realizar, esto se debe principalmente a que en el nuevo régimen democrático pesa aún la herencia del régimen militar (hay que recordar que Augusto Pinochet seguirá manteniéndose al frente de las Fuerzas Armadas hasta 1997).

Hay instituciones, mecanismos, leyes que impiden que la mayoría social, política y electoral pueda gobernar de manera efectiva debido a que el poder militar todavía no redefine, institucionalmente, sus relaciones con la sociedad, ni ocupa su lugar subordinadamente al poder político.

Lo anterior no significa que el país no viva en una democracia, sino que ésta, por efectos de los fenómenos antes mencionados, no se ha consolidado y hace más difícil el planteamiento de tareas sociales proyectadas a futuro, lo que va más allá de la voluntad de un gobierno.

El actual presidente chileno, Eduardo Frei, ha aceptado que la transición democrática está lejos de terminar y reconoce que existe debilitamiento en el poder civil, ello debido a la persistencia de enclaves autoritarios. Por lo anterior, formula una propuesta al Congreso con el objetivo de solucionar el problema de los detenidos-desaparecidos y plantea la introducción de reformas a la Constitución que buscan reducir el poder de los jefes castrenses (*La Jornada*, 22-8-95: 37).

La inconclusa transición democrática chilena es preocupación de todos los partidos políticos, así lo advierte la escritora y vicepresidenta

del Partido Socialista Chileno, Isabel Allende: "ahora estamos pretendiendo avanzar, [...] por lo menos, para que haya reformas constitucionales que devuelvan al presidente todas las prerrogativas que le corresponden como primera figura de la nación, elegido por soberanía popular, [...] pretendemos avanzar hacia el término de algunos de los enclaves autoritarios que la Constitución de 1980, impuesta por Pinochet, nos dejó. Pretendemos avanzar en el conocimiento de la verdad de cada uno de los casos que afecta a los familiares de los detenidos y los desaparecidos. Verdad y justicia son los elementos esenciales de la reconciliación" (entrevista concedida a enviados de Radio Educación a Chile, difundida el 11 de septiembre de 1995).

Bibliografía

Abramo, Luis; María Isabel Arauco; Guillermo Campero *et al.*: 1991. *El sindicalismo latinoamericano en los 90, sindicatos y transición democrática*, Planeta-ISCOS-CLACSO, Chile, 268 pp.

Andulante, Adolfo; Ángel Flisfisch y Tomás Moulián: 1985. *Estudios sobre el sistema de partidos en Chile*, FLACSO, Chile, 231 pp.

Aron Raymond: 1960, *Democracia y totalitarismo Siglo XXI*, México, 228 p.p.

Arriaga, Genaro; Guillermo Campero; René Cortázar, *et al.*: 1986. *Democracia en Chile, doce conferencias*, CIEPLAN, Chile, 279 pp.

Ascanio Cavallo, Manuel y Oscar Sepúlveda: 1988. *La historia oculta del régimen militar*, CLACSO, Chile, 450 pp.

Baño, Rodrigo: 1990. *Tendencias políticas y resultados electorales después de veinte años*, FLACSO, serie: Estudios Políticos, núm. 8, Chile, 20 pp. (mimeo).

Baño Rodrigo; Fernando Bustamante y Hernán Gutiérrez: 1991. *Conformación de opiniones sobre los partidos políticos en el desenlace de la transición*, FLACSO, serie: Estudios Políticos Nº 10, Chile, 116 pp. (mimeo).

Barba Solano, Carlos; José Luis Barrios Horcasitas y Javier Hurtado (comp): 1991. *Transiciones a la democracia en Europa y América Latina*, UAG-Porrúa-FLACSO, México, 726 pp.

Barrera, Manuel, Helia Henríquez y Teresita Selamé: 1985. *Sindicatos y Estados en el Chile actual*, CES-Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, Chile, 196 pp.

Barrera, Manuel y Gonzalo Falabella (comp.): 1990. *Movimientos sindicales en regímenes autoritarios*, CES-Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISO), Chile, 318 pp.

Barrera, Manuel: 1994. "Política de ajuste y proceso de democratización en Chile. sus efectos sobre los trabajadores", en *Revista Mexicana de Sociología*, Instituto de Investigaciones Sociales, México, 211 pp.

Boloyra, A. Enrique: 1992. "La transición del autoritarismo a la democracia en el sur de Europa y América Latina: problemas teóricos y bases de comparación, en Julián Santamaría, *Transición a la democracia en el sur de Europa y América Latina*, Centro de Investigaciones Sociales, Madrid, 421 pp.

Campero, Guillermo y José A. Valenzuela: 1981. *El movimiento sindical chileno en el capitalismo autoritario*, ILET, Chile, 605 pp.

Campero Guillermo: 1984. *Los gremios empresariales en el periodo 1970-1983, comportamientos sociopolíticos y orientaciones ideológicas*, ILET, Chile, 227 pp.

Campero, Guillermo: 1987. "Democracia y actores sociales en Chile: entre la lógica del cambio cultural", en Mario R. dos Santos Calderón (comp.), *Los conflictos por la constitución de un nuevo orden*, CLACSO, Argentina, 328 pp.

Campero, Guillermo: 1993. "Los empresarios chilenos en el régimen militar y el postplebiscito", en Paul W. Drake e Ivan Jaksic (comp.), *El difícil camino hacia la democracia en Chile 1982-1990*, FLACSO, Chile, 562 pp.

Cavarrozi, Marcelo y Manuel Antonio Garretón (coordinadores): 1989. *Muerte y resurrección de los partidos políticos en el autoritarismo y las transiciones en el cono sur*, FLACSO, Chile, 520 pp.

CESOC: 1984. *Constitución de 1980. Comentarios de juristas internacionales*, CESOC, Chile, 127 pp.

Chaparro, Patricio; Jaime Crispi; Manuel Antonio Garretón, et al: 1987. *Chile 1973-1987*, Revista Mexicana de Sociología-FLACSO, Chile, 316 pp.

Crozler, Michel y Erhard Friedberg: 1990 *El actor y el sistema. Las restricciones de la acción colectiva*, Alianza Editorial, México, 391 p.p.

Frühling Hugo: 1985. "Reproducción y socialización de núcleos de resistencia: la experiencia de la Vicaría de la Solidaridad en Chile, en *La cultura del miedo bajo regímenes militares*, CLACSO, Argentina, 297 pp.

Garretón M., Manuel Antonio: 1985. *La problemática de la transición a la democracia en Chile, una síntesis*, FLACSO, Santiago de Chile, 15p. (mimeo).

-----: 1985. *Partidos políticos, sociedad y democratización*, FLACSO-Chile, 35 pp. (mimeo).

-----: 1985. *La problemática de la transición a la democracia en Chile, una síntesis*, FLACSO, Material de discusión, Chile, 15 pp. (mimeo).

-----: 1986. *Transición hacia la democracia en Chile e influencia externa: dilemas y perspectivas*, Working Paper, Kellogg Institute, 33 pp. (mimeo).

-----: 1987. *Reconstruir la política*, Andante, Chile, 293 pp.

-----: 1990. *Los partidos políticos en la perspectiva de la transición y consolidación democráticas*, Working Paper, núm 138, The Helen Kellogg Institute for International Studies, USA, 21 pp. (mimeo).

-----: 1991. *La transición democrática en Chile, una evaluación provisoria*. FLACSO, serie: Estudios Políticos, núm.9, Chile, 20 p. (mimeo).

-----: 1993. "La oposición política y el sistema partidario en el régimen militar chileno, un proceso de aprendizaje para la transición", en Paul W. Drake e Ivan Jaksic (comp); *El difícil camino hacia la democracia en Chile 1982-1990*, FLACSO, Chile, 562 pp.

Gómez, Sergio: 1987. *Organizaciones empresariales rurales, los casos de Brasil y Chile*, FLACSO, Chile 46 pp. (mimeo).

Gómez, Sergio: 1993. *Organizaciones empresariales rurales: demandas y movilizaciones*, FLACSO, Chile, 35 pp. (mimeo)

Lynn Karl, Terry: 1991. "Dilemas de la democratización en América LatinaE, en Carlos Barba Solano (comp.), *Transiciones a la democracia en Europa y América Latina*, Universidad de Guadalajara-Porrúa-FLACSO, México, 727 pp.

Maira Luis: 1984. *Chile: autoritarismo, democracia y movimientos populares*, ILET, Chile 331 pp.

Maza de la G. y M. Garcés: 1989. *La explosión de las mayorías, protesta Nacional 1983-1984*, ECO, Chile, 152 pp.

Molina Natacha: 1988. *Protestas políticas y orientaciones de cambio en la situación de la mujer, 1987*, FLACSO, documentos de trabajo, 42 pp. (mimeo).

Moulian Tomás: 1990. *Antecedentes y causas de la crisis de la democracia en Chile*, FLACSO, serie: Estudios Políticos, núm. 6, Chile, 31 pp.(mimeo).

Muñoz Heraldo y Carlos Portales: 1987. *Una amistad esquiva: las relaciones de Estados Unidos y Chile*, Andante, Chile 117 pp.

O'Donnell, Guillermo; Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead (comp.): 1988. *Transiciones desde un gobierno autoritario. América Latina*, Paidós, Argentina, tomo 2, 359 pp.

O'Donnell, Guillermo; Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead (comp.): 1988. *Transiciones desde un gobierno autoritario. Perspectivas comparadas*, Paidós, Argentina, tomo 3, 287 pp.

O'Donnell, Guillermo; Philippe C. Schmitter (comp.): 1988. *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, Paidós, Argentina, tomo 4, 127 pp.

Oxhorn Phillip: 1986. *Democracia y participación popular: organizaciones poblacionales en la futura democracia chilena*, FLACSO, serie: confrontaciones, núm., 44, Chile 116 pp.

Portales, Carlos: 1987. "Democracia y Derechos Humanos en la política del presidente Reagan", en *Estudios Internacionales*, año XX, núm. 79, 388 pp.

Portales, Carlos: 1993. "Los factores externos y el régimen autoritario", en Paul W. Drake e Ivan Jaksic (comp.), *El difícil camino hacia la democracia en Chile 1982-1990*, FLACSO, Chile, 562 pp.

Przeworski, Adam: 1988. "Algunos problemas en el estudio de la transición hacia la democracia", en O'Donnell, Guillermo; Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead (comp.), *Transiciones desde un gobierno autoritario. Perspectivas comparadas*, Paidós, Argentina, tomo 3, 287 pp.

R. dos Santos , Mario (comp.): 1987. *Concertación política social y democratización*, CLACSO, Chile, 378 pp.

Serrano, Claudia: 1988. "Pobladoras de Santiago: algo más que la crisis", en ISIS-MURD, *Mujeres, crisis y movimiento*, Chile, 196 pp.

Schumper, Joseph: 1950, *Capitalismo, socialismo y democracia*, Siglo XXI, México, 304 p.p.

Torres Rivas, Edelberto: 1990. *El sistema político y la transición a la democracia en Centroamérica*, FLACSO, Costa Rica, 100 pp.

Valdés, Teresa: 1986. *El movimiento poblacional: la recomposición de las solidaridades sociales*, FLACSO, Chile, 56 p. (mimeo).

Valenzuela, María Elena: 1993. "Las mujeres en la transición democrática", en Paul W. Drake e Ivan Jaksic (comp.), *El difícil camino hacia la democracia en Chile 1982-1990*, FLACSO, Chile, 562 pp.

Varas, Augusto: 1987. *De la violencia aguda al registro electoral: estrategia y política de alianzas del Partido Comunista, 1980-1987*. FLACSO, Documento de Trabajo, núm. 362, Chile, 36 pp. (mimeo).

Varas, Augusto: 1993. "Crisis de legitimidad del autoritarismo y transición democrática en Chile", en Paul W. Drake e Ivan Jaksic (comp.), *El difícil camino hacia la democracia en Chile 1982-1990*, FLACSO, Chile, 562 pp.

Weber, Max: 1944, *Economía y sociedad*, Fondo de Cultura Económica, Tomo I, México, 335 p.p.